

ORIENTESE
REVISTA DE CULTURA POLÍTICA DEL FRENTE DE GUERRA ORIENTAL
COMANDANTE EN JEFE MANUEL VÁSQUEZ CASTAÑO
DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL. E.L.N.
Primer Semestre de 2017. Año 9. No.9.
Montañas, selvas y sabanas del Oriente Colombiano
CONGRESO

ORIENTESE

Revista de Cultura Política del
Frente de Guerra Oriental
Comandante en Jefe
Manuel Vásquez Castaño
del Ejército de Liberación Nacional.
ELN. Colombia.

No. 9, Año 9
Primer Semestre 2017

Directores:
M.P.M.E. del F.G.O.

Consejo Editorial, en Memoria:
Domingo Laín Sáenz
Efraín Pabón Pabón
José David Suárez
Adonay Ardila Pinilla
Compañero Diego
Compañera Nubia
Compañera Estrella
Compañero Pomares
José Alfredo Arriguí
Pedro Arturo Téllez
José Daniel Pérez

Diseño y diagramacion:
Colectivo Hombre Nuevo

Edición Impresa:
Ediciones-Venceremos

Distribución
Sistema Patria Libre

Página Internet:
www.fgoriental.org
www.voces-eln.com
www.patrialibre.org

Emisora
Voz de la Libertad, 95.5 fm stereo

Hecho en las montañas, selvas y
sabanas del Oriente Colombiano.





Sumario



LA VOLUNTAD POLÍTICA NO ES SINÓNIMO DE CLAUDICACIÓN

Ante las matrices de opinión que generan los medios de reproducción ideológica del régimen, hegemonizadas por la oligarquía con la plataforma de la ideología burguesa; es bueno, que los revolucionarios auténticos estemos prestos a confrontarlas con objetividad y radicalidad.

El Ejército de Liberación Nacional asume la Mesa de Diálogos con el gobierno, para que se evidencie la **naturaleza política** del conflicto social y armado, y se alcancen de la mano del pueblo, los cambios y transformaciones estructurales que garanticen su realización espiritual y material. Pero para ello tenemos que revisarnos todos los actores sociales, políticos e institucionales, en cuanto a las responsabilidades en el conflicto e infelicidad del pueblo.

Que el modelo económico, la doctrina de seguridad, la seguridad social, el orden jurídico y funciones del Estado, entre otros, no sean considerados como nodales en la Mesa presagia un diálogo de sordos.

Nuestra voluntad política no se orienta para renunciar a nuestra naturaleza de insurgencia popular, y menos por una ración de campaña, de Congreso y de mermelada, entre otras. Nos asiste una voluntad transformadora que propugna por la superación de las causas que originaron el conflicto social y armado histórico en Colombia.

Asumir la agenda en su orden lógico, sin atajos, sin presiones indebidas, con participación democrática de todos los sectores sociales (no delegada), es serio y responsable. Lo convenido expresa el reconocimiento entre las partes, que se vive un conflicto, y hay unas fuerzas legítimas

en contienda en contra del Estado y gobierno, la insurgencia popular. En tal sentido asumimos la mesa de diálogo y su agenda en el marco que se ejerza la soberanía popular.

Es inconcebible que la delegación del gobierno exija **cese de hostilidades,** más aún, cuando en Colombia ya no es asesinando un dirigente social, de derechos humanos y revolucionarios cada tres días, sino uno cada dos días. Y con "regalos de navidad" como las leyes de Reforma Tributaria y Nuevo Código de Policía, medidas antidemocráticas y antipopulares, a nombre de la paz para los colombianos, se reafirma que estamos ante un Estado que ejerce la guerra sucia y el terrorismo afectando gravemente al tejido social.

De esta forma, el Estado de los burgueses no habla de paz, sino de "pacificación", o mejor de paz para el capital nacional e internacional, *y ese salto al vacío no lo vamos a dar los Elenos*, porque para nosotros la paz será una realidad cuando se den los cambios y transformaciones estructurales.

Que renunciemos a nuestra condición de rebeldes y a la lucha armada como forma principal de lucha, sólo lo determinará la superación de las causas que nos motivaron a erigirnos como una **Vanguardia Político Militar Revolucionaria**, del pueblo y para el pueblo.

¡Colombia para los trabajadores,
¡Ni un paso atrás, Liberación o Muerte!

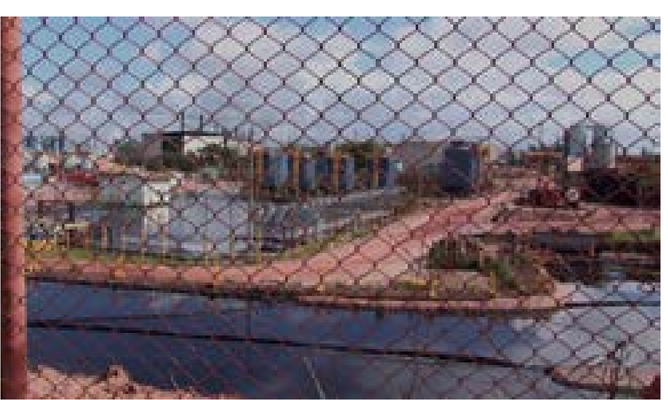
¡Ni rendición, ni entrega,
¡Siempre junto al pueblo!

Mando Político Militar Estratégico
Frente de Guerra Oriental
Comandante en Jefe "Manuel Vásquez Castaño"
Ejército de Liberación Nacional.

Montañas, Selvas y Sabanas del Oriente Colombiano
Abril de 2017

PAZ, HEGEMONÍA Y LUCHA POPULAR





Pacificación para la intervención del capital es el escenario diseñado por parte del régimen burgués del presidente Santos, que no es más que facilitar la ejecución de proyectos extractivos, monocultivos, entre otros, por parte del capital financiero nacional y trasnacional. En tal escenario, es evidente lo beneficioso y rentable que es para los negocios capitalistas en Colombia, posicionarse en territorios donde hubo presencia guerrillera de FARC. Esta rentabilidad vía concesiones y contratos beneficia a funcionarios corruptos del gobierno nacional, de gobernaciones y alcaldías. Como ejemplo, nada mejor que el caso de ODEBRECHT, que en su afán de lucro, buscó ganar con cara o con sello al aportar a dos campañas presidenciales al tiempo.

Aunque a simple vista los casos de ODEBRECHT y el de la desmovilización de FARC aparecen distantes, en realidad están relacionados, porque evidencian cómo el capital transnacional manipula e incide sobre los gobiernos, en beneficio propio, para hacerse a contratos y poder explotar los recursos naturales.

A pesar de que existe una disputa entre la oligarquía, la burguesía en Colombia, desde el gobierno, adecua al Estado, las leyes y la Constitución, en prospectiva a la desmovilización, desarme y entrega de la insurgencia como lo hizo con las FARC-EP. Para esta organización se trataría de un cambio de estrategia, limitándose a ser un partido político legal, lógica que el gobierno intenta imponerle al ELN. Sin embargo, después de haber ganado el NO, en el plebiscito del 2 octubre de 2016, la ultraderecha desafía lo acordado en Cartagena y se niega a su aceptación; de otra parte, a una fracción de la izquierda le preocupa que esos acuerdos no terminen siendo vinculantes para el ELN; mientras la mayoría de los colombianos asumen una actitud de indiferencia porque los acuerdos no logran transformaciones de fondo, que solucionen los problemas de la nación.

Los procesos de “diálogo y paz”, han motivado discusiones políticas en la cotidianidad de los colombianos, sin embargo, estos se mantienen a cierto nivel superficial y permanecen en los límites que le marcan los medios de la burguesía. Además, estos debates no son decisorios, y si son recogidos, terminan siendo adoptados como insumos discursivos en las campañas electorales, y en la elaboración de planes de gobierno a nivel nacional y local, de manera que las banderas de lucha y reivindicaciones son cooptadas y puestas a funcionar en favor del capitalismo, como sucede con la construcción de vivienda y vías. Al respecto,

se podría considerar pertinente que esas iniciativas deberían ser recogidas mediante la participación electoral de la izquierda, sin embargo, hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas favorable a la maquinaria de los politiqueros tradicionales.

Por eso, el asunto electoral es un espejismo, debido al desgaste proselitista, que implica una competencia en desventaja respecto de la hegemónica maquinaria política tradicional, con sus grandes inversiones, en parte provenientes del erario público, que le permiten ejercer prácticas asistencialistas y clientelistas durante las campañas. Los mencionados hechos hacen de éste proceso, un escenario poco probable para las trasformaciones desde la izquierda. Y en todo caso, cabe recordar, que estos intentos no son más que pasos, que de salir bien, escasamente llegarían a ser sólo reformas, que implicarían tan solo soluciones parciales, de cara a los problemas estructurales que vive el país.



Además, es una constante que a través de los medios de producción y reproducción ideológica, se quiere imponer sobre los colombianos estar a favor de la paz desde la perspectiva de Santos. La intención evidente, es fortalecer y legitimar al bloque dominante, a su macabra alianza con el capital financiero trasnacional. En ese marco, lo que se viene interiorizando entre la población, son las supuestas bondades de la inversión extranjera, con ello, justifican el saqueo directo y legal de los recursos minero energéticos de la nación.

Ante los acuerdos con las FARC y diálogos con el ELN, el movimiento social identifica la necesidad de reafirmar banderas de lucha, e históricas reivindicaciones, que han sido desconocidas y negadas durante décadas por la burguesía gobernante.

Si los procesos y expresiones organizativas no son recogidas, o no están conformes con lo acordado en la Habana y Cartagena, deberían no limitarse a aceptarlos pasivamente, y por el contrario, continuar en la lucha como insurgencia popular hasta alcanzar sus objetivos. Sin embargo, esta perspectiva se podría dificultar ante el riesgo de cooptación de dirigentes y líderes sociales por parte del Estado, en el desarrollo de ese proceso.

Por lo tanto, se hace indispensable, desde las expresiones espontaneas y organizadas del pueblo colombiano, no dejarse arrebatar las banderas de lucha, ni mucho menos dejar institucionalizar las propuestas políticas y programáticas. La práctica ha demostrado el propósito de la oligarquía, al pretender inmovilizar la lucha popular. Recuérdese que los diálogos de paz descartan temas esenciales a la vida nacional, como son: la soberanía política y territorial, la expansión de la producción nacional asentada en la generación de tecnología, investigación, ciencia e innovación, a fin de que se permitan puestos de trabajo con cobertura en seguridad social universal y sin explotación, condiciones apenas básicas de la autodeterminación económica.

En esa perspectiva, vale resaltar las luchas políticas y jurídicas adelantadas por el pueblo colombiano contra el extractivismo. De manera ejemplar las naciones originarias han desarrollado acciones en contra de la extracción petrolera en el oriente de Colombia; también, de parte de las comunidades de Cajamarca (Tolima) y Tauramena (Casanare) al lograr oponerse mayoritariamente a la explotación

minera en el primer caso, y petrolera en el segundo. Valerosa iniciativa a seguir por parte de todos los colombianos y colombianas, y en particular de las comunidades víctimas de esta continúa forma de saqueo, que cuenta con el beneplácito del bloque dominante en el poder.

Un factor que juega en contra de los acuerdos y del régimen de gobierno, son los más de seis millones de votos opositores en el plebiscito, y las movilizaciones promovidas por la extrema derecha vinculada con el narcotráfico y el paramilitarismo, convocadas cínicamente en contra de la corrupción. Las movilizaciones impulsadas por el jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias Popeye, responsable de las masacres causadas por las bombas que colocaron en lugares céntricos de Bogotá y Medellín, resultan aderezadas por el discurso del Centro Democrático, que pretende presentarse como campeones de la anti-corrupción, como si los procesos de las notarías, desfalcos a la salud, agro-ingreso seguro, o Reficar no hubiesen existido como parte de su gobierno. De esta manera, la ultraderecha facistoide demarca lo que será el escenario electoral a la presidencia en 2018, en su pretensión de retomar el gobierno en beneficio de terratenientes, de las fuerzas militares y su expresión paramilitar, que no son más que la materialización de la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno.

De común conocimiento es que el ambiente electoral determinará la coyuntura en el 2018. La tendencia por parte del gobierno es permanecer con el pragmatismo economicista en favor del gran capital, sostener su política contrainsurgente de pos conflicto, buscando desmovilizar al ELN, y concediendo algunos pírricos beneficios, en particular sobre titulación de tierra, pero sin dar solución a los problemas que vive la población urbana, que es el 80% del país. Por su parte, el conservadurismo uribista hace cuentas del favor que le proveería el gobierno derechista de Trump, promueve el recorte de los "acuerdos de paz", en particular sobre el tema de tierras, y alienta la guerra directa contra el pueblo realzando el poder de la estructura castrense, todo ello a fin de restaurar la hegemonía de los narco-para-terratenientes.

La continuidad del actual régimen de gobierno, que representa la gran burguesía nacional, está amenazada por el desprestigio del presidente Santos. La estrategia del bloque dominante es capitalizar el descontento de los colombianos con Santos y poner en la presidencia un candidato que se acerque más a la extrema derecha. Dado ese contexto, darán continuidad desatando la guerra frontal contra el pueblo y el ELN, en el marco de la Doctrina Damasco. Esta tendencia político-militar va en sintonía con el intervencionismo militarista impartido desde la Casa Blanca, que ubica a Colombia como la potencialidad -ya anunciada- de una injerencia bélica en Venezuela, según lo refirió Trump a comienzos de abril. Recuérdese, que la presencia militar estadounidense en Colombia es la aproximación para el manejo y control de la Orinoquía y Amazonía, y la profesionalización con enfoque mercenario del ejército colombiano que se encamina a fortalecer las fuerzas invasoras de la OTAN.

El divorcio entre el uribismo y el santismo, que es apreciable a simple vista, debido a su disputa por la hegemonía del régimen de gobierno, tiende a diluirse si se considera que el afán de lucro los une, en la ambición por la acumulación de tierra y capital. Desde esta situación, surge su alianza antiproletaria

y antipopular, en la búsqueda del eslabón que los una como clase oligarca y pueda llevarlos nuevamente a gobernar Colombia como lo hicieron entre el 2002 y 2010.

De otro lado, pero con un mismo fin, la burguesía haciendo uso monopólico de los medios, pretenden posicionar en el pueblo, y la pequeña burguesía, matrices de opinión en contra de las acciones legítimas, anticapitalistas y antiimperialistas, del ELN.

Por el contrario, cínicamente se dedican a invisibilizar la corrupción en el caso del financiamiento a las campañas presidenciales; o a levantar la imagen de Santos, como premio nobel de paz, por haber firmado el acuerdo de desarme con las FARC, mientras se pronunciaba, a comienzos de abril, en favor del bombardeo a una base militar en Siria.

El descaro y la doble moral son los principios en los que se basa la arremetida mediática desde el gobierno nacional y la burguesía. De un lado, se muestra una supuesta realidad de prosperidad en que vivirían las familias del pueblo colombiano, pero que es totalmente falsa. La verdad, es que la mayoría está a merced de la pobreza, el desempleo e informalidad, permanecen las precarias condiciones de garantía a la salud, la falta de oportunidades para acceder a la educación gratuita y de calidad, el déficit de vivienda y falta de cobertura de los servicios públicos (acueductos, redes de alcantarillados, recolección de basuras, energía eléctrica). Por esto, sobrevivimos en medio del alto costo de vida, a causa de los bajos salarios, reducidos además por la Reforma Tributaria Estructural y el aumento de las tasas de interés, hasta en un 75%, las que son fijadas por el Banco de la República, medidas que solo benefician al capital financiero en manos del gran capital.

Ante estas condiciones, que son evidentes en la cotidianidad del pueblo colombiano, se reafirma que la realidad se transforma desde la perspectiva anticapitalista, en beneficio de las mayorías y de manera radical desde la insurgencia popular, que también es parte de la consolidación del Bloque Popular y Revolucionario, en la lucha por el socialismo.



LA REFORMA TRIBUTARIA:

REDUCIR LOS INGRESOS DEL PUEBLO PARA LLENAR LAS ARCAS DE LA BURGUESÍA



Tras un arduo debate en la Cámara y el Senado, el 28 de diciembre de 2016 fue sancionada la más polémica reforma tributaria que los colombianos hayan conocido en los últimos años. Esta iniciativa, adornada con artículos sobre la lucha contra la corrupción, ha sido promovida nada más y nada menos que por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, investigado por procedimientos indebidos en la venta de Isagén así como por el escándalo de Reficar, casos en los que la nación ha perdido más de lo que proveerá la nueva recaudación en 2017, es decir, de entrada, la reforma tiene un poco de la misma porquería que intenta combatir.

La ley 1819 de 2016 que reglamenta la reforma, ha sido calificada por el gobierno como estructural, progresiva y modernizante. La propia DIAN ha prometido que con ella se simplificarán los trámites al ciudadano para el pago de impuestos y se combatirá la elusión y la evasión. En la coyuntura política actual, esta reforma ha sido sesgadamente interpretada como una respuesta del gobierno Santos a la necesidad de obtener los recursos necesarios para financiar los compromisos del pos acuerdo con las FARC, así como el desenlace de esa ***estrategia contrainsurgente de pos conflicto***. Por esta razón ha sido objeto de críticas y rechazos tanto de sectores en desacuerdo con las negociaciones de paz con las FARC, como de los opositores de izquierda y derecha al gobierno de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, es necesario hacer una lectura crítica tanto a las bondades que promete el gobierno con esta



iniciativa, como a la interpretación coyunturalista que relaciona la reforma tributaria solamente con "el proceso de paz", argumento que se volvió el caballito de batalla del uribismo al finalizar el año pasado. Si bien es cierto que la nueva ley proveerá algunos recursos para el escenario del pos acuerdo,

es claro que su origen y urgencia están relacionados fundamentalmente con los preocupantes resultados económicos de los últimos años, producto del desarrollo de nuestro capitalismo criollo, en donde predomina la actividad minero-energética y el sector de la construcción en la dinamización del Producto Interno Bruto (PIB). Pero también se relaciona con el fracaso de las estrategias con las que se pretende continuar descorriendo la crisis de acumulación de capital iniciada desde los setenta, como son la multiplicación del capital ficticio, la primarización y las medidas neoliberales, que han producido al menos cuatro efectos desastrosos en la economía nacional desde su implementación en las últimas cuatro décadas.

Primero, se ha profundizado la dependencia del país a los precios del petróleo y los minerales en el mercado internacional y ha pronunciado la multiplicación del capital ficticio, acelerado la concentración de capital financiero, dando lugar a una mayor especulación, al aumento del endeudamiento y a desfalcos como el sonado caso de Interbolsa. El gobierno reconoce el origen de la reforma tributaria en la realidad del fracaso primarizador:

> "La caída de los precios del petróleo redujo en $24 billones los ingresos del Gobierno Nacional y resaltó la necesidad de construir una economía diversificada, menos dependiente de los ingresos minero-energéticos. La reforma es una de las herramientas principales para fortalecer nuestra economía, para que genere más empleo formal y para que resista mejor los choques externos como las volatilidades del dólar y los precios del petróleo".

Pero no está dispuesto a admitir que la crisis del petróleo no es un simple *choque externo* que nos afecta coyunturalmente, sino que el problema está en la errónea perspectiva que adoptó la burguesía para lograr un ajuste estructural en los años ochenta y la apertura durante los noventa del siglo anterior. Vale aclarar que esa política es errónea para el pueblo, las mayorías, pero para unas minorías nacionales e internacionales les resulta una mina de oro, la garantía de su acumulación. Así por ejemplo, anualmente el gobierno nacional traslada más de 20 billones de pesos para dinamizar (subsidiar) el sector de la construcción, por ello precisamente Santos no quiso discutir de este tema en la mesa de negociación con las FARC.

Segundo, se ha generado un amplio déficit fiscal que resulta en apariencia paradójico en un contexto de políticas antiinflacionarias y de disciplina fiscal que han comprometido en los últimos años la inversión social, con consecuencias visibles y preocupantes en los sectores populares. Es decir, que el discurso de reducción del gasto fiscal, la regla fiscal, privatización



y la noción de eficiencia con los que se prometió en los noventa combatir la ineficiencia y corrupción del Estado ha resultado una mentira. Mentira porque

hoy el Estado sigue siendo ineficiente, es más corrupto y gasta más, pero no para beneficiar a la población, sino para garantizar la acumulación en el sector privado, vía contratación, por medio de la apropiación de recursos públicos, como sucedió con Odebretch o Saludcoop.

Y este es el tercer punto. Se ha agudizado la apropiación de recursos públicos por parte de las empresas privadas al convertir al Estado en una de las fuentes más generosas para acumular capital, y en medio de una economía de mercado cada vez con menos regulaciones, y con más incentivos para incrementar la tasa de ganancia a costa de los recursos públicos.

Finalmente, se ha acelerado la corrupción. Ella no es un fenómeno nuevo, pero su manifestación actual se debe analizar más allá de la dimensión moral, vinculándola con la realidad concreta de una economía de mercado en la que se incentiva a todas las personas a disputar y acumular los recursos de manera voraz y descarnada apelando al individualismo liberal, al principio de la economía neoclásica del "mayor beneficio con el menor esfuerzo", a la competencia, la desregulación, la mercantilización y alienación de la vida social.

La corrupción se acelera porque el modo de acumulación descansa en la explotación minera, energética y la construcción, denotando una forma regresiva de ampliar las fuerzas productivas, al intentar dinamizar el proceso desde los sectores primarios, antes que, desde la industria, como debería suceder en un capitalismo dinámico. Y estas áreas requieren para su funcionamiento de las concesiones y permisos que da la institucionalidad estatal, tanto como de los subsidios y exenciones. Sobre esta realidad, el capital actúa de manera previsiva al colocar sus fichas (políticas) en las instancias que deben proveer las condiciones favorables, de manera que el *proceso electoral* hace parte de sus inversiones hundidas. En consecuencia, las instancias estatales son puestas a funcionar como medio directo de acumulación de capital, siendo la corrupción sólo una manifestación de este entramado, en el que los políticos son un eslabón principal, tal como lo evidencia el caso Odebrecht.



Son los efectos negativos y destructivos de esta forma reaccionaria de acumular capital, lo que intenta corregir el gobierno con una reforma tributaria que tuvo antecedentes importantes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sin la reforma, afirmó el gobierno, se perdería el grado de inversión, y como sugirió el polémico Ministro Cárdenas, el país perdería la nota que le tenían asignada los organismos internacionales, prefiriendo el Estado reducir los recursos de programas sociales en alrededor de $4 billones para poder pagar intereses más caros. Es decir, la Reforma está sobre todo en función de mantener la Inversión Extranjera Directa, responder servilmente a la calificación crediticia internacional y entregarnos a la usura del sistema financiero y crediticio interno y externo.

Más allá de las diferencias partidarias entre santistas, uribistas, el Polo, o de los debates y polarizaciones que puede generar el problemático proceso de desmovilización de las FARC, la reforma señala una verdad estructural: el pueblo pagará a punta de impuestos y con su trabajo por los efectos negativos de un modo de producción retrogrado y destructor que beneficia a unos pocos, pero no a la mayoría. En otras palabras, la reforma tributaria desenmascara las promesas fallidas de la burguesía ante la evidencia de un pobre crecimiento, una regresiva

redistribución de la riqueza, un empleo precarizado y una estructura productiva frágil y dependiente.

Lo que resulta aún más dramático es que el intento de “corrección” se hará apelando a una fórmula bastante regresiva: aumento del IVA del 16% al 19% en productos procesados de primera necesidad. El aumento del IVA no aplicará para el arroz, la papa, la carne, el plátano, las frutas y las verduras, pero sí para los detergentes, los jabones, los enlatados y todo lo que es procesado, es decir, productos que equivalen al 60 % de la canasta familiar y son consumidos permanentemente por los colombianos, por lo que, independientemente del precio, la gente tendrá que comprarlos. El comportamiento esperable es que la gente baje la calidad de los productos que adquiere, buscando que la platica le alcance para todo, pero ello no hará más que disminuir su calidad de vida y bienestar. En consecuencia, la reforma es un eufemismo para denotar una baja de la masa salarial y un incremento de la masa de ganancia.

La Reforma promete cárcel para los evasores, pero el rango de ingreso mínimo es tan alto (5.000 millones) y las estrategias de elusión y evasión tan sofisticadas entre las clases altas, que esta será una disposición sin ninguna aplicabilidad. Por el contrario, iniciativas como la propuesta de reducir los aportes a la salud de los pensionados, de 12 a 4% de sus ingresos mensuales, que iba a beneficiar a más de un millón de jubilados, no pasó dentro de la conciliación en el Congreso.

En severo contraste, las pérdidas anuales por corrupción sobrepasan los veinte billones, y las de exenciones y evasión superan los treinta, según la DIAN, recursos que por supuesto quedan en manos del gran capital[1].

Aunque se hicieron exenciones en algunos productos de uso femenino, el grueso de la reforma, que incluye impuestos a los celulares, electrodomésticos, planes de teléfono y otros servicios, impacta profundamente a las clases populares del país, manteniendo los privilegios a los conglomerados transnacionales y nacionales. Como todas las reformas tributarias esta termina una vez más gravando a los pobres; esos que generan con su trabajo la plusvalía que mantiene vivo al capitalismo, los que son explotados, los que sufren las consecuencias de un modo de vida que no eligieron, y los que encima de todo se ven forzados a tapar con sus impuestos los fallos y los baches en la acumulación de los más ricos.

Por tener que sufrir los estragos de un modo de acumulación de capital, que además luego condena vía impuestos a pagar sus efectos atroces y su fracaso, el pueblo colombiano debe exigir que se detengan las condiciones que levantan una guerra económica en su contra, el desmonte de la reforma tributaria, y fundamentalmente, la transformación radical y profunda del sistema capitalista.





1 Citado en: “Esquilmando la clase trabajadora”, Libardo Sarmiento, Lemonde Diplomatique/Nov/2016, Colombia



EL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA ¡MÁS REPRESIÓN PARA EL PUEBLO!





Mientras el gobierno nacional finiquitaba el proceso de desmovilización de las FARC y la instalación de la mesa de negociación con el ELN, se legitimó ganándose toda la atención de los colombianos; a la vez que bajo la mesa inició un proceso desde el cual se profundizaron las políticas neoliberales, a través de medidas impopulares como la Ley de Zidres, el Plan Maestro de la Orinoquía, el avance del modelo extractivo, el Nuevo Código Nacional de Policía y la Reforma Tributaria. Con estas medidas favoreció a los grandes capitales transnacionales y se entrega la tierra de los colombianos a empresas extranjeras. Mientras tanto los colombianos se preguntan ¿qué queda para ellos? La respuesta no debe sorprender a nadie: Reforma Tributaria para extraer más recursos de los pobres y nuevo código de policía para reprimir cualquier protesta y mantener la dominación sobre los colombianos.

El nuevo código que entró en vigencia el 30 de enero de este año, aplicando multas entre 99.000 y 787.000 pesos con las cuales no solo se pretende castigar a la gente, restringiendo las libertades y los derechos ciudadanos, sino también generar recursos para el Estado, lo que es costumbre en Colombia: un Estado que saca más y más dinero de los pobres para financiar a los corruptos y poderosos que lo controlan.

Multas para los "colados" en los servicios de transporte público, es decir, gente de bajos recursos que no tienen para pagar el transporte, en el caso de ciudades como Bogotá, Medellin, Bucaramanga, entre otras, han sido elevadas este año y que terminan llenando los bolsillos del sector privado y de los politiqueros de turno, multas para quien se niegue a dar su nombre o número de documento de identidad, multas para quien se resista a un traslado policial, multas para quienes no colaboren con el medio ambiente y multas para quien no pague a tiempo sus multas, y por si fuera poco, el reporte en la centrales de riesgo a los morosos, en un país en

el que la policía atraca y desaparece a la población. De esta forma se va consolidando y ampliando la sociedad del control y la represión en Colombia.

Igual de grave que las multas son las facultades para disolver la protesta social “las autoridades podrán disolver de manera legal cualquier protesta social si lo creen pertinente”. Es decir, que el derecho constitucional a la protesta queda vulnerado por la decisión arbitraria de la burguesía retardataria y asesina, que blinda a una policía corrupta fortaleciendo los escuadrones de la muerte como el ESMAD, quienes con acciones demenciales y terroristas asesinan sistemáticamente, como lo señala en sus informes la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, referido a los falsos positivos policiales.



Además establece el uso de la fuerza, permitido por iniciativa propia o por petición de otra persona. En teoría, este elemento solo se aplicará en casos para prevenir comportamientos contrarios a la ley; por si se niegan a cumplir las medidas correctivas; o para defenderse o defender a alguien que esté en riesgo de ser afectado en su integridad; sin embargo, ya sabemos de lo que son capaces, en ciudades como Medellín o Bogotá, entre otras, donde están al servicio del micro tráfico, como el caso del Bronx y del paramilitarismo.



Como si no fuera suficiente, con las facultades dadas, se autoriza a la policía para el uso de medios tecnológicos o de “otra naturaleza” para mantener la “seguridad”. Es decir, se abre el camino para que en la represión hacia el movimiento popular, se empleen pistolas de descargas eléctricas, gas pimienta y otros elementos que, como se ha probado en otros países, pueden producir daños severos en la salud humana y causa la muerte. Los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, son un distractor en el nuevo código, y no hay ninguna duda que la policía desconocerá estos principios. De manera que esta ley retrotrae el Estatuto de Seguridad Nacional de 1978 de los violentísimos regímenes turbayista y uribista.

Otro elemento crítico tiene que ver con el apoyo civil a las acciones de la policía, situación que intenta proporcionarle legitimidad al terrorismo de Estado. Como si no fueran suficientes los 26 líderes sociales asesinados solamente entre enero y marzo de este año, el nuevo código, bajo el pretexto de permitir el apoyo de particulares a acciones en “beneficio” de la ciudadanía, abre el camino para consolidar la expansión del paramilitarismo y mercenarios que está teniendo lugar en todo el territorio nacional, reactivando la guerra sucia contra el bloque popular y revolucionario.

No podemos obviar el empadronamiento y la actualización de las bases de datos que realizan permanentemente, aplicando lo que denominan detención administrativa y el allanamiento sin orden judicial, partiendo de la premisa de supuestas

llamadas de informantes y de la limitación de acciones terroristas o con el pretexto de socorrer a algún ciudadano en peligro. Los riesgos de esta medida son altísimos por varias razones:

Primero, basta recordar que en 2016 dos policías fueron detenidos porque se les acusó de robar la vivienda del congresista Roy Barreras en Cali. En otras palabras, si la policía en Colombia se ha caracterizado por ser una forma de crimen organizado, con el nuevo código tendrá todas las condiciones para operar sin ninguna restricción.

Segundo, este conjunto de medidas va a profundizar la crisis de derechos humanos que ha vivido Colombia desde hace varias décadas, reforzando la criminalización de la protesta y del movimiento social.

Por último, este código está generando las condiciones para pacificar violentamente los conflictos sociales, económicos y ambientales del presente y los que se desarrollarán en el futuro, producto de las políticas explotación, saqueo y despojo.

Ante este escenario, el pueblo colombiano tiene la obligación de emplear todas las estrategias posibles de la insurgencia popular, como lo dijera Jorge Velosa en la Lora Proletaria ***"con el proletario al frente, con el campesino al lado, con la guerrilla avanzando y con el pueblo organizado"***. Por eso desde la lucha guerrillera continuaremos golpeando al régimen y sus estructuras de represión. Es precisamente cuando el tirano aprieta más duro, que el pueblo debe poner en juego sus mejores calidades para mantener la lucha y resistencia popular.









REGRESA EL NACIONALISMO DE ULTRADERECHA







La tesis marxista de que el capitalismo tan sólo puede desplazar las crisis de acumulación de capital al costo de ampliar y profundizar sus contradicciones, cobra mayor vigencia a medida que transcurre el tiempo. El planteamiento descansa en el hecho de que el capital se constituye sobre la lucha de clases y una serie de contradicciones que le son insuperables a su propio funcionamiento. Por eso, la crisis abierta desde 1973 y prolongada mediante dramáticas recesiones como la de 2008, tiende a ampliar su contenido, por cuanto agita la lucha de clases, dificulta la gobernabilidad, y motiva el enfrentamiento entre el capitalismo imperialista de occidente (EEUU / UE +Japón) y el de oriente (Rusia + China) dando lugar a guerras económicas y militares.

Sin embargo, tales fenómenos no se extienden para siempre, y en su desenvolvimiento se van creando condiciones que pujan por salidas, que pueden ser: revolucionarias como sucedió en octubre de 1917; o de derecha, como el fascismo y la guerra imperialista. Desde entonces, la salida siempre ha dependido del entendimiento de la crisis y su transformación en fuerza organizada del proletariado, de manera que cuando ésta ha resultado insuficiente, termina por darle paso a la reaccionaria y peligrosa tendencia de derecha. En este esquema *general*, la socialdemocracia ha jugado la función

de fuerza auxiliar del capital, *al cooptar, neutralizar, y desmotivar la respuesta proletaria*, facilitándole el paso a la acción "restauradora" de la ultraderecha.

1. *Crisis, lucha de clases y cooptación socialdemócrata*

Tras la dura recesión de 2008, la crisis ha venido siendo desplazada mediante el relajamiento extremo de la oferta monetaria, permitiéndose que las firmas capitalistas continúen adquiriendo sus propias acciones con el dinero barato que entregan los bancos centrales, política fracasada para traducir el relajamiento del crédito en inversión "real" y expansión de la producción, resultado manifiesto en un crecimiento pobre del PIB mundial, en el que los EUUU "brillan" con tasas cercanas al 2%, todo ello al costo de expandir sin límites el *capital ficticio* y la inmanejable deuda mundial.

El bajo crecimiento, la ampliación del desempleo, y por sobre todo la baja de los salarios promedio mediante la fracturación de la relación salarial, caldearon la lucha de clases, por eso las movilizaciones proletarias tomaron las calles de varios países, manifestándose por millones después de una larga década de relativa quietud.

En ese momento (2008) existía la posibilidad de su organización y orientación revolucionaria, aunque en su contra pesaba la desarticulación de organizaciones con *carácter proletario*, mientras prevalecían las ideologías liberales. En el marco de la prolongada crisis, el mismo capitalismo promovió la renuncia a la lucha revolucionaria y al socialismo, desarmándo al proletariado de un programa de lucha claro, y de una organización que le proveyera la fuerza de clase. En particular la postura *posmoderna* fue ampliamente vendida como tendencia transformadora y amiga de las reformas democráticas que reconocen las **múltiples identidades** parciales en el marco del Estado capitalista[1]. Antecedentes y tendencias que









1. Los escritos de Chantal Mouffe sobre la "Democracia Radical" son un ejemplo. A través de ellos la vieja ideología liberal de tipo kantiano es posicionada como una supuesta fuerza transformadora. Se argumenta que los "nuevos movimientos sociales" se constituyen

ayudan a comprender porque las movilizaciones fueron perdiendo fuerza, y poco a poco han sido capitalizadas por la nueva socialdemocracia, como sucedió explícitamente en Grecia, España y de algún modo con Sanders en los EEUU[2].



Hasta fines de 2014 el desarrollo más interesante lo presentaba el proletariado griego, que se manifestó a través de huelgas y marchas, acumulación que permitió derrumbar al régimen de domino político, pero que terminó siendo cooptada y conducida por un partido político electoral reformista que titubeó una y otra vez ante el vacío de poder. Por el contrario Syrisa se instaló en el gobierno y tembló ante la amenaza de ser expulsados de la Unión Europea (UE), intimidación desafiada por las masas al votar en contra de las condiciones de rescate[3]. Sin embargo, a los dos días, el gobierno capituló abiertamente ante el gran capital, aguándose uno de los ciclos más álgidos e interesantes de las recientes luchas obreras.

La atención se trasladó en 2016 al partido *Podemos* de España, una coalición de múltiples expresiones, que logró canalizar las grandes movilizaciones de los años anteriores. La crisis de acumulación española se tradujo en una grave crisis de dominio político, no sólo por las movilizaciones del proletariado español, sino por la puesta en evidencia de la profunda corrupción mediante la que se reproducen las élites empresariales y el bipartidismo (PP y PSOE).

Estas condiciones permitieron que Podemos se posicionara como fuerza electoral en las elecciones a alcaldías, tras lo cual limitó aún más su programa reformista, en la esperanza de capturar más votos en su candidatura a la presidencia en diciembre de 2015, logrando una importante tercería que ayudó a desencajar el bipartidismo e impidió la conformación de gobierno. Al igual que en Grecia, se forjó una profunda *crisis de gobernabilidad* que duró hasta noviembre de 2016, periodo durante el cual Podemos primero fue pasivo, luego reculó, y enseguida empezó a descomponerse. Lo substancial, es que ante la ampliación y profundización de la crisis, las masas populares no fueron llamadas a la calle, por el contario, se promovió la calma y se apoyó el orden legal. En síntesis, de a poco se fue capitulando ante la débil sombra del Partido Popular.

A esa tendencia se suma el cambio hacia gobiernos de ultraderecha en Argentina y Brasil, resultado que parece anunciar el cierre del ciclo de los gobiernos socialdemócratas o de centro-izquierda en América Latina.

El ciclo de transformaciones sociales en AL fue resultado de los nefastos efectos de la crisis de acumulación capitalista y de las políticas con las cuales se ha tratado de desplazarla. El drástico recorte de salarios y derechos laborales, la reducción del gasto público social, la privatización y mercadificación de servicios esenciales a la vida humana como salud, educación, o vivienda, se mezclaron con los negativos efectos de la entrada del capital a zonas rurales, orientados especialmente a la extracción minera y a la explotación de recursos naturales. Así, el capital cumplió la tarea de agitar una lucha

sobre la base de identidades parciales, como ser negro, mujer, ecologista o gay. En tal sentido, la ***representación*** que las personas forjan sobre si mismas serian llamadas a jugar un papel protagónico en la constitución de la democracia. Pero por esta vía, los problemas sociales quedan limitados y suspendidos en el marco de las ideas, de la representación, y en consecuencia es negada la condición objetiva de la clase social.

2. Pre-candidato a la presidencia por el Partido Demócrata

3. El ex-ministro griego de economía, Baruk Yanufakis, manifestó que esperaban perder el referéndum, de manera que eso los liberaba de culpas ante su capitulación frente a la Troika.

social y de clases que ha golpeado históricamente a los habitantes rurales y urbanos mediante diversos mecanismos, fuerza que en cada país dio lugar a procesos organizativos y de movilización a través de los cuales se reclamaba la reposición de los derechos perdidos, a los que se fueron agregando aspectos históricos de reconocimiento, que por supuesto terminaron por cuestionar los regímenes de dominación y los estrechos márgenes con los que se constituyeron las democracias de la región.



Así, bajo las condiciones históricas particulares en que se ha configurado el capitalismo en cada país, se fueron conformando procesos de movilización y protestas que se repitieron en busca de salidas alternativas, contra regímenes de dominio que sólo ofrecían la desgastada formula de salvar al capital y sacrificar a las clases y sectores sociales explotados y/o marginados.

Las crecientes protestas populares dejaban en evidencia que las oligarquías con su ***ideología neoliberal y sus políticas*** resultaban incapaces para desplazar la crisis capitalista, de manera que la alternativa se configuró a través de los gobiernos de centro-izquierda, perspectiva que se hizo creciente desde fines de los noventa. En ese marco, las fuerzas movilizadas resultaron conducidas por partidos que promovieron la reforma social y las luchas electorales, escenario que les permitió asumir *el poder de gobierno*[4]. En términos generales, su diagnóstico definió a las políticas neoliberales como el objetivo a superar, de manera que se concibieron estrategias orientadas a *promover el capitalismo nacional*, junto a una mezcla de programas, de talente socialdemócrata, orientados a ampliar la democracia, y a redistribuir el gasto público en favor de los sectores populares.

El giro político se vio favorecido por la profundización de la crisis mundial y el desplazamiento de los capitales excedentes hacia la especulación en los precios de las materias primas (2003-2013). De esa manera los gobiernos contaron con una masa de recursos que se orientaron principalmente a alentar el capital nacional, aunque también incrementaron el gasto público en programas asistencialistas que en buena medida permitían sostener el favor del voto popular. Finalmente, la presión de sectores de las oligarquías en asocio con el imperio norteamericano fue medrando, a lo que se sumó el cierre del ciclo especulativo de precios desde 2014, de manera que la crisis capitalista ha rebrotado con mayor fuerza, evidenciándose que sus causas estructurales apenas se desplazaron temporalmente, produciendo el escenario propicio para el giro hacia los gobiernos derechistas.

En este marco, la relación entre los gobiernos y los sectores populares pasó a ser de tutelaje, y en ese vínculo, la crítica de izquierda ha sido considerada incomoda e indeseable. Por esa vía se desdibujaron los objetivos centrales del programa socialista, bajo la falaz espera de que poco a poco se sucedería un avance decidido hacia la izquierda. Y en ese ordenamiento, los movimientos con signo proletario, junto a la mayoría de intelectuales de izquierda con reconocimiento público se mostraron más bien complacientes. No obstante, con el nuevo giro, las razones y lecciones van saltando, como recientemente lo refiere Claudio Katz:

4. Los escritos recientes de Martha Hacnekcer y Atilio Borón dan cuenta de este tránsito.

"... lo que falló fue la idea de que puede haber un capitalismo benigno, que puede haber un capitalismo redistributivo, que puede haber un capitalismo humano. Estos modelos neodesarrollistas se basan en la idea de que el capitalismo es un sistema reformable, mejorable, y se olvidan que el capitalismo es capitalismo; es un sistema de ganancia, competencia, explotación; ***y si no hay proyectos socialistas para superar el capitalismo, la derecha termina recuperando el poder***[5]*".*

En términos ciertos, el balance de los resultados difiere en cada una de las experiencias señaladas, sin embargo, de una manera general, nuevamente el expediente de la socialdemocracia se revela como una variante disfrazada de las fuerzas capitalistas, que ***frena, confunde, desanima, desarticula y domestica al proletariado y al movimiento social,*** al punto de crear una condición de paz social necesaria para que el capital reduzca los salarios y pueda manejar con menor dificultad su crisis.



2. *Debacle de la socialdemocracia y giro al nacionalismo de ultraderecha*

La elección de Trump como presidente de los EEUU permite comprender el giro y la relativa consolidación de la tendencia hacia el nacionalismo de ultraderecha.

El asunto no es nuevo, porque hace varios años en Polonia, Hungría y Austria existen gobiernos de ese talente, a los que se suman los resultados electorales en Gran Bretaña (Brexit), e Italia, país en que se posiciona el Movimiento Cinco Estrellas, de cariz nacionalista-populista. Este conjunto de fuerzas dificultan la gobernabilidad de la UE, de manera que el nacionalismo entra en choque con sus intereses imperialistas. Inestabilidad política muy inconveniente a una región al borde de la deflación, con bajísimo crecimiento y en permanente amenaza de crisis financiera, ante el riesgo de quiebra del Deutsch Bank, principal banco de Alemania.

A este escenario se suma la elección de Trump, traducida ya en fuerza de inestabilidad política en los EEUU. El discurso nacionalista de ultraderecha puesto en escena caló en los obreros blancos que sufren los efectos del desempleo, ante la promesa de regresarles los puestos de trabajo que se fueron al exterior. A su vez, la oferta de convertir a los EEUU en el gran país que fue, da cuenta de los nefastos efectos de la crisis, vértice en el que se encuentran las perspectivas de los EEUU con la Rusia de Putin.

El desarrollo de grandes obras, como autopistas y trenes de alta velocidad a fin de recuperar el crecimiento, hace poco era alentado por renombrados intelectuales de izquierda (Amin, Harvey, Petras, entre otros). La política de Trump ha sumado la terminación de redes de oleoductos, descuentos en impuestos, y un alza forzada de las tasas internas de interés. Así, el conjunto de medidas constituyen un paquete de incentivos tendientes a animar la tasa de ganancia ante la persistencia de su tendencia a la baja.

A nivel internacional, la disputa por la hegemonía mundial entre *el capitalismo occidental y el oriental* se mantiene. Al respecto, el gobierno Trump intenta contener y reversar la alianza estratégica entre Rusia y China, perspectiva a la que fue empujado el gobierno de Putin, al ser fijado como blanco principal de ataque por el gobierno Obama. Por lo tanto, el punto objetivo se desplaza hacia China, país que ha disminuido sensiblemente su crecimiento y

---

5. En entrevista de Luis Bonilla, publicada en Rebelion.org, el 09-11-2016. Colocamos el resaltado.

es muy vulnerable a los ataques económicos debido al riesgo de una burbuja inmobiliaria[6].

Por lo tanto, la ideología nacionalista de derecha se orienta a atender el frente interno, a fin de darle orden, sin descuidar sus posiciones en el frente externo, cumpliendo un papel de "bisagra" en esa tarea contradictoria, puesto que se requiere controlar las masas obreras, y ganar su apoyo, en el difícil escenario de superar la crisis de acumulación.

La perspectiva no es nueva, porque según Hobsbawn el nacionalismo como política de la derecha nació a fines del siglo XIX, y se caracterizó por resaltar lo nacional contra lo extranjero y lo socialista, a la vez que se mostró partidario de la expansión agresiva del propio Estado[7].

En aquel contexto de inicios del siglo XX, la crisis de acumulación de capital se hizo notoria desde 1896 y al igual que ahora se prolongó por varias décadas. En forma similar, la crisis golpeó al proletariado de manera que las movilizaciones y su lucha fueron creciendo, perspectiva de lucha truncada por la debacle socialdemócrata de la Segunda Internacional que pasó a privilegiar la reforma y la alianza con las burguesías nacionales[8]. En consecuencia los proletarios quedaron desarmados y a merced de la absurda ideología que culpa al extranjero de la pobreza que se vive en casa, perspectiva que no sólo exculpa al capitalista, sino que coloca al proletariado bajo la tutela del capital nacional en el momento que se alista para la guerra de rapiña imperialista.

Recuérdese que la guerra es el escenario de última instancia mediante el cual se desvaloriza el capital, a la vez que se liquida físicamente mano de obra sobrante, condiciones esenciales para dar inicio a nuevos ciclos en la acumulación, como el sucedido entre 1945-1973, perspectiva que tenderá a circunscribirse a grandes guerras regionales, tal como sucede en el área y vecindades de Siria-Irak-Turquía-Afganistán, debido a las condiciones tecnológicas actuales, y al amplio entrecruzamiento de capitales entre regiones del mundo.

Si estas reflexiones están en lo cierto, los escenarios geopolíticos venideros contienen tendencias peligrosas para el capital y sus Estados.

- De una parte, porque la crisis de acumulación capitalista se traduce en inestabilidad política tanto en la Unión Europea como en los EEUU[9], condición que toma la forma del rebrote nacionalista de ultraderecha, a la vez que genera duros choques entre facciones del capital. Así por ejemplo, el gobierno de

---

6. Existen varios ensayos al respecto, ver los de Alejandro Nadal en la Jornada; o Enrique Muñoz. Robin Lee "China Cuando estalle la burbuja inmobiliaria", publicado en Rebelion.org, 30-11-2016

7. Hobsbawn E. (1988), "La era del imperio 1875-1914". Pg 152.

8. La historia es extensa, pero esquemáticamente podríamos señalar que el movimiento obrero y sus partidos tienden a privilegiar la lucha electoral durante las dos últimas décadas del siglo XIX, que se corresponde con un periodo de auge en los beneficios capitalistas. Esa tendencia política resultó fortalecida con la orientación de la *Segunda Internacional (1899)*, influenciada por el libro "*Socialismo Evolutivo*" de Eduard Bernstein (1899), que pregonaba *la evolución, la reforma y la alianza con las burguesías* como medio para avanzar al socialismo, y rechazaba la lucha revolucionaria que Marx y Engels pre-visualizaron necesaria. En consecuencia, el movimiento proletario y sus partidos van siendo domeñados y desarmados, por lo que frente a la profundización de la crisis y el desempleo, se facilitó la reproducción de la política nacionalista, camino por el que el proletariado de cada país fue conducido a apoyar a las burguesías en la rapiña imperialista.

9. Esta tendencia ha sido resaltada a mediados de diciembre por la firma Bloomber.

Trump deberá enfrentar la permanente y atizada acusación de ser agente ruso.

- De otra, porque atentar contra la estabilidad económica de China, es minar el área que le ha provisto algo de estabilidad al capital mundial en la última década, de manera que una recesión en China sería más que un tsunami mundial.
- Además, porque China es tenedora de una buena cantidad de deuda de los EEUU, es un Estado nacional con una autonomía que no se puede comparar a la de la UE, Japón, o la misma Rusia, de manera que frente al chantaje, las estrategias de respuesta pueden generar profundos efectos para el inestable capital occidental.

En síntesis, la continuidad de la crisis de acumulación de capital ya no solamente se expresa como un problema económico, agita la lucha de clases, pero ésta toma la cara reaccionaria del nacionalismo, en un escenario en el que el capital imperialista occidental se descompone y de manera torpe ataca a sus contrincantes del capitalismo oriental.





UNA MIRADA A LA COYUNTURA LATINOAMERICANA, ENTRE EL IR HACIENDO Y EL QUÉ HACER





La región Latinoamericana enfrenta una etapa de cambios abruptos y poco favorables para el campo popular. Si bien los *gobiernos de centro izquierda* no han representado proyectos de transformación radical, en el sentido socialista, es pertinente reconocer que constituyen procesos de cambio social orientados a superar los muy limitados marcos de la *democracia restringida*, a la vez que, de mejorar las garantías y derechos sociales, objetivos más explícitos en los procesos de Venezuela y Bolivia. A partir de este criterio, es comprobable que se está suscitando un giro hacia la derecha, con la derrota del gobierno del Kirchnerismo en Argentina, el golpe parlamentario al gobierno de Dilma Roussef en Brasil, el ascenso de las fuerzas de derecha en Venezuela y la estrecha victoria electoral en Ecuador.

La ola de la retoma del poder político, mediático y social por parte de la derecha y sectores ultraconservadores es global. Europa se debate electoralmente entre la ultraderecha y la derecha, dilema que pretende dejar a cualquier opción de izquierda fuera de combate y que viene sucediendo en Colombia con la disputa por el poder entre el Uribismo y el Santismo que en lo que se identifican profundamente es en ser enemigos del pueblo. Trump haciende al poder con un discurso xenófobo, machista y proteccionista, representando una transición del "neoliberalismo progresista"

liderado por Clinton y Obama durante décadas y que al igual que en Brasil, Uruguay y Argentina, significó la alianza de sectores progresistas con el capital financiero y corporativo.

Para la región, la caída en los precios del petróleo y otros productos primarios, en el marco de una crisis económica global, ha llevado a las economías dependientes y rentistas a recesiones prolongadas y a la profundización de las políticas de la ideología neoliberal.

La derecha gobernando en Argentina y Brasil

El golpe parlamentario vivido en Brasil y la llegada de Macri en Argentina, han tenido diferentes efectos a nivel regional y nacional. Regionalmente ambos países enfilaron sus armas contra Venezuela en el MERCOSUR y siguen construyendo alianzas corporativas y políticas con los sectores más recalcitrantes del continente y el imperio.



En Argentina, como era de esperarse se han desmontado en un corto plazo las garantías y derechos sociales que se ganaron durante los gobiernos Kirchner. Desde el año pasado la protesta y movilización social viene en aumento. Recientemente, trabajadores y trabajadoras de la economía popular se tomaron las calles para exigir la aplicación de manera inmediata de la ley de Emergencia Social, el salario social, creación de empleo y derechos laborales. Los docentes se lanzaron a marchar en contra de los ajustes salariales y sociales, las mujeres lideraron una de las más grandes movilizaciones de los últimos tiempos en contra del feminicidio y el patriarcado, y por fin, después de muchos años de disputa de unos y de acomodamiento de otros, vastos sectores sociales buscan caminos de unidad.

En Brasil la situación no es muy distinta. Temer y su gobierno corporativo recortan derechos y garantías, reprimen movimientos sociales como los Sin Tierra y los Sin Techo, profundizan la entrega de recursos y territorios al capital trasnacional, y como desde su gestación golpista, siguen involucrados en casos de corrupción como el más reciente de Odebrecht. Un golpe en tribunales, una clase política totalmente untada de corrupción y un creciente descontento popular, en medio de la más fuerte recesión económica de los últimos tiempos, son factores que configuran una bomba de tiempo.

El movimiento popular que en buena parte asumió con complacencia y pasividad los gobiernos del Partido de los Trabajadores PT, hoy se ve abocado a una abierta y directa oposición; las protestas sociales en contra de las alzas y mala calidad de los servicios públicos, cuya inversión quiere congelarse por 20 años, la quiebra del presupuesto público, alzas en el transporte, precarización y flexibilización laboral, luchas anticorrupción y antigolpe, son la constante en tiempos recientes. Pese a esto el fraccionamiento del movimiento social y de la izquierda, sigue presente, con el reto de perseguir un objetivo común más allá de la institucionalidad y de la restauración del poder político en cabeza de Dilma.

En suma, la realidad concreta que saltó a la cara de todas y todos con la derrota del Kirchnerismo en Argentina y el golpe a Dilma en Brasil, es que sin movimientos sociales fuertes, sin construcción de poder popular y sin políticas de transformaciones estructurales, no será sostenible ningún gobierno de izquierda, por más progresista que quiera denominarse, y que solo la conciencia de clase de las mayorías y su organización como clase proletaria, podrán construir el proyecto socialista, superando el capitalismo.

México: violencia, pobreza y represión



México vive una de las épocas más difíciles y conflictivas de su historia reciente. Los gobiernos de derecha que han dominado el poder desde hace décadas, profundizaron en el país la situación de dependencia económica y política de los Estados Unidos que hoy por hoy ejerce como gobierno de facto en el país azteca. Los impactos negativos del NAFTA, que llevaron a la quiebra del aparato productivo nacional y a una ascendente dependencia de las importaciones, baja productividad y caída de la industria manufacturera, no han sido superados por la entrada en vigencia de la Alianza del Pacífico, por el contrario se agudizaron.

Esto se refleja en el bajo crecimiento de la economía mexicana, que se ha estancado desde hace más de 20 años en un promedio anual de 2.45 %. Lo que si crece es la pobreza y la concentración de la riqueza, donde el 1% concentra cerca del 21% de los ingresos del país. Esta crónica debacle socioeconómica se agravó, como en toda la región, con la caída de los precios del petróleo, que representa cerca de una cuarta parte de sus ingresos públicos. Sumado a ello el triunfo de Trump en Estados Unidos y su claro ataque a la población migrante mexicana, así como sus ímpetus de proteccionismo de la mano de obra gringa, están socavando la economía de las remesas y relocalizando las empresas hacia los EEUU.



Tanto la crisis petrolera como los costos de un modelo económico fracasado los ha pagado el sector público y la población. Peña Nieto puso sobre los hombros de Pemex (empresa pública petrolera) la mitad del recorte del gasto público, continuó reduciendo la inversión social, ahorcando a los sectores medios y populares. Mientras tanto, el endeudamiento del país aumenta, la economía del narcotráfico que involucra a políticos, mandatarios locales, policía y fuerza pública sigue rampante y creciendo. La represión del Estado del capital, ha generado episodios como los de Ayotzinapa, feminicidios constantes, desapariciones, torturas y muerte.



Como respuesta, la movilización social ha sido muy fuerte en los últimos tres años tras la masacre y desaparición de los normalistas; pero la impunidad y las agresiones siguen en aumento. Las protestas de los maestros contra la reforma educativa terminaron en el asesinato de 8 docentes y 7 desaparecidos en Oaxaca a mediados de 2016; allí continúan preparándose nuevas jornadas pues no se resuelven ni escuchan sus demandas.

La inconformidad con el gobierno de Peña Nieto se exacerbó con el alza de los precios de la gasolina comenzando el 2017, derivando en el llamado "gasolinazo" que convocó a miles de personas a las calles en todo el país. También Trump ha motivado la movilización; en febrero de 2017 se organizó una gran marcha por la dignidad y en contra del imperialismo norteamericano y de Peña Nieto; este brote de unidad nacional seguramente no será desaprovechado por el gobierno y la clase política dominante, que tratarán de encauzarlo hacia una invisibilización de la crisis interna. Sin embargo, las múltiples movilizaciones y protestas no alcanzan a tener la fuerza suficiente para desestabilizar al gobierno y provocar un proceso de unidad y levantamiento popular, que pueda darle un nuevo rumbo soberano a la nación mexicana.



Guatemala y el Salvador

Guatemala sigue el patrón de la crisis socioeconómica que enfrenta la región, agudizada por las dinámicas de violencia, pandillas, maras, corrupción e impunidad. La coyuntura la marca un paro nacional contra la corrupción y exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales, movilización que se sumaría a las ya convocadas por los asesinatos de las niñas, tras una protesta "infantil" por maltrato y abusos en un hogar social.

En el Salvador, cuya dinámica no es muy distinta, se sienten con rigor los coletazos de un proceso de Paz, que al igual que el de Guatemala no tocó al capital ni resolvió ninguna de las causas de la guerra; por el contrario, el neoliberalismo se consolidó con el Tratado Centroamericano de Libre Comercio CAFTA (firmado también por Guatemala, Honduras, Costa Rica), y la gestión de la derecha en cabeza del partido ARENA durante 20 años.

Desde 2009 el FMLN tomó, a través de las urnas, el poder político y aunque ha logrado democratizar algunos espacios políticos y sociales en el país, enfrenta obstáculos muy grandes derivados de la crisis vivida durante décadas: la emigración de un número muy significativo de la población a Estados Unidos, el control económico que por vía de las remesas y el dólar tiene el país del norte y la intención abierta de militarización que han tenido los gobiernos norteamericanos que ven en el Salvador más que a una nación, una futura base contrainsurgente. La tarea del FMLN y del presidente Salvador Sánchez no es fácil pero significa para Suramérica y América Latina en general, un bastión de la disputa antiimperialista y popular en la región.

La importancia de las elecciones en Ecuador

Ecuador ha vivido en los últimos años del gobierno de Alianza País un importante avance en cuanto a estabilidad política y derechos sociales que, sin desconocer sus logros frente al combate contra la pobreza, políticas laborales, acceso a bienes, etc., presenta fracturas relacionadas con el impacto de una economía rentista y extractiva, que continúa golpeando a la población campesina e indígena, y afectando los territorios y la naturaleza.

Reconociendo las contradicciones dentro del proceso político ecuatoriano, es fundamental destacar el claro alineamiento del gobierno Correa con los países progresistas, acciones y actitudes desafiantes frente al imperio y su abierto apoyo a Venezuela y Cuba. Estos factores y la política interna le han traído al gobierno ecuatoriano serios problemas con el poderío capitalista y con los sectores tradicionales de la política nacional.

Es por esto, que desde hace años se configura un bloque de oposición de la derecha proimperialista y financiera, que bajo las mismas formas heredadas de la derecha golpista venezolana, ha ganado un escenario mediático y político. Las sucias campañas mediáticas contra Correa y Alianza País, la legítima movilización de sectores sociales, indígenas y campesinos afectados por los proyectos extractivos, el uso y manipulación política que de estas y otras inconformidades sociales hace la oposición, y los propios errores o falencias del gobierno, pone en aprietos la Revolución Ciudadana.

La restauración conservadora y neoliberal en la región avanza, el pueblo resiste y en todo el continente debemos continuar forjando la insurgencia popular, los levantamientos y protestas, las movilizaciones, la construcción del poder popular y toma del poder en todas sus dimensiones, incluido el poder político con propuestas radicales y transformadoras que rompan el cerco de la democracia burguesa y no reproduzcan sus profundos vicios. Es nuestro deber fortalecer la formación político ideológica, para no caer en las trampas liberales y tener la capacidad de entender el momento actual y la coyuntura que nos permita planificar táctica y estratégicamente el proceso revolucionario, sin dogmatismos ni sectarismos pero con claridad política, principios y conciencia de clase. La región latinoamericana está en movimiento, la gente está en movimiento y el movimiento es cambio y transformación, sin encerrarnos en idealismos pero siempre luchando



Homenaje a Fidel Castro

LA CIUDAD COMO EXPRESIÓN DE UNA SOCIEDAD DIVIDIDA EN CLASES



Camilo y el Che en la fachada de la Universidad Nacional de Colombia.. Reivindicamos los símbolos históricos de la lucha revolucionaria en los Campus Universitarios.

Entrado ya el siglo XXI, los cambios de la sociedad colombiana avizoran el recrudecimiento de la desigualdad social y de la imposición criminal de la miseria promovida por el capital sobre la mayoría de la población. La urgencia por el fomento de la lucha revolucionaria en miras a una sociedad más justa, aparece hoy como una obligación ineludible; no obstante, a diferencia de los procesos llevados por las gestas insurgentes y las movilizaciones sociales campesinas de hace unas décadas, hoy las ciudades aparecen como un campo de lucha en el que se deben librar buena parte de los debates, acciones y conquistas del pueblo trabajador contra sus históricos explotadores.

Bajo el capitalismo, la división internacional del trabajo ha generado a nivel mundial una organización desigual, que especializa a países como Colombia en la explotación de los recursos naturales y agropecuarios, en una dinámica de ganancia para el capital, que facilita el posicionamiento de los conglomerados transnacionales como las instituciones centrales dentro del poder mundial. Así, históricamente, los renglones de la economía que más importancia tienen en la nación, se han ligado a los ciclos de bonanzas de productos agrícolas como el café, la quina, la palma, la caña o a recursos minero-energéticos como el oro, el petróleo o el carbón. Renglones que han sido acaparados históricamente por la oligarquía, bien sea por los terratenientes herederos de las relaciones coloniales, por la incipiente burguesía industrial, o por los actores transnacionales que han impuesto un orden económico mundial a su conveniencia.

Para que esta realidad, de explotación de los territorios, haya sido acaparada por clases minoritarias y privilegiadas, fue necesaria la construcción de un orden político represivo centrado en la explotación y proletarización de la fuerza

trabajadora campesina; así como en el despojo unido a la acumulación de los medios de producción por parte de la oligarquía nacional y la burguesía transnacional.

Como bien lo relata la historiografía colombiana, para dar respuesta a esa necesidad de despojo y acumulación, se generó la alianza del gran capital con el Estado, la cual ha generado una maquinaria legislativa, militar, económica y política encargada de arrebatar a los trabajadores del campo colombiano la tierra y los medios de producción que han sido históricamente importantes para la economía del país.

Este proceso de despojo de las zonas rurales, se ha realizado de forma sistemática, generando una violencia estructural que profundiza la pobreza y desigualdad a las que históricamente se ha condenado a los campesinos tanto en el país, como en el continente. Estas son las razones centrales por las que, desde la mitad del siglo XX, se han presentado oleadas migratorias del campo a la ciudad dando por resultado una población colombiana mayoritariamente urbana.

En efecto, esta estrategia de despojo de los campos, se ha consolidado a partir de la violencia en la acción de las fuerzas armadas estatales y paraestatales, que por medio de la represión han hecho que, desde la década de 1960, la mayoría de colombianos vivan en las ciudades y que en la actualidad, las ciudades concentren al 80% de la población nacional.

Pero este proceso de despojo de los campos y de concentración de la tierra, estuvo acompañado por un proceso limitado de industrialización, animado mediante políticas de sustitución de importaciones, con las que se pretendía reducir la dependencia productiva de las potencias industriales, por medio de incentivos gubernamentales a la burguesía nacional, para fomentar la industria interna.

De esta forma las actividades industriales, los servicios y el comercio, también tomaron una importante fuerza dentro de los renglones estratégicos de la estructura económica colombiana. Hacia la década de los 70's y 80's los empleos industriales en el país alcanzaron a representar cerca del 20% del total del empleo formal nacional, y conglomerados urbanos como Bogotá-Soacha, Medellín-Valle de Aburra, Cali-Yumbo y Barranquilla-Soledad, vieron la consolidación de una urbanización dirigida hacia la industria y conglomerados económicos nacionales.

Esta situación, promovería una transformación notoria en las condiciones demográficas del país; la población campesina, despojada de sus tierras se convertía en población asalariada, qué a través de un proceso de proletarización progresivo, va apareciendo vinculada directa o indirectamente con la industria dominada por la burguesía nacional. Esta situación dio paso a la consolidación de una clase obrera, que rápidamente protagonizaría desde las últimas décadas del siglo XX, junto con los sectores campesinos en resistencia en las zonas rurales, las movilizaciones sociales en miras a la reivindicación de los derechos laborales en contra de la avaricia del patronazgo y el terrateniente.



La ciudad, en consecuencia, vería florecer al movimiento obrero, que logró gestar hitos de luchas importantes por medio de huelgas, paros y manifestaciones constantes y que se veía acompañado de otros sectores urbanos. Por su parte, la lucha insurgente, que había visto su nacimiento

en el campo, aparecería ahora en las ciudades enarbolando banderas eminentemente económicas, como aquellas ligadas al acceso a los bienes propios de la ciudad, por ejemplo, por medio de la conformación de barrios para la clase trabajadora que fueron resultado de luchas populares fortalecidas por las vanguardias armadas.

Desde los sesentas hasta finales del siglo XX, las grandes ciudades de Colombia, distribuidas regionalmente bajo una especie de cuadrilátero urbano encabezado por Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, tuvieron crecimientos de cerca de 10% anual de su población, lo que significa una expansión enorme. Bogotá, por ejemplo, pasó de tener una población inferior a medio millón de habitantes, hacia mediados de siglo, a una población de cerca de 8 millones para finales del mismo. Como resulta obvio, mientras este crecimiento urbano sucedía, se configuraba la clase proletaria y dentro de ella la clase obrera industrial, hija de la industrialización acelerada pero débil.

No obstante, esta industrialización aunque importante para el desarrollo económico nacional, no significó mejoras en las condiciones de vida para la mayoría de la población, dado que se basaba justamente en la explotación laboral de los trabajadores, razón por la cual, las ciudades se convirtieron en el escenario fértil para el descontento social, y para la materialización de las contradicciones del capital; no es de extrañar, entonces, que de los procesos de movilización social generados en los escenarios urbanos, surgieran derroteros de acción para la lucha armada, que se vio fortalecida con los insumos, ideas, cuadros y proyectos generados desde las ciudades y adoptadas en las selvas donde germinaba la lucha guerrillera.

Los conflictos socio-económicos, se agudizaron aún más con las políticas de sumisión sobre las que se han soportado las burguesías nacionales aliadas del gran capital transnacional, qué como forma de salir de la crisis iniciada desde finales de la década del 80, impidieron la consecución de procesos de autonomía económica nacional, debilitando los procesos de industrialización, al generar modelos aperturistas para el mercado y la inversión extranjera directa. En efecto, la tendencia privatizadora de los servicios sociales, la imposición del capital sobre el trabajo, la flexibilización laboral, entre muchos otros factores, hizo de las ciudades escenarios donde se manifestaba, aun con mayor crudeza, los crímenes de la violencia estructural generada por la desigualdad socioeconómica.



En suma, la urbanización implicó territorialmente la consolidación de un proceso de deserción progresiva de los campos, y la concentración de población empobrecida en las ciudades que no tenía cabida en el empleo urbano formal. Allí, en las grandes urbes, se configuraron los cinturones de miseria: enormes áreas donde se asentó la mayor parte de la población trabajadora que, por la fuerza del capital, se inserta en economías urbanas formales e informales las cuales conllevan progresivamente a condiciones de vida indignas.

Estos cinturones de miseria, son el reflejo de un fenómeno social que presenta por lo menos dos facetas: de una parte, las desigualdades estructurales sobre las que se soporta la segregación socioeconómica, que condena al proletariado a vivir en áreas aisladas; y de otro lado, los esfuerzos de la clase trabajadora por generar, de forma cotidiana, las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, las cuales son apropiadas en una amplia parte por la oligarquía para su disfrute.

En efecto, los barrios de las periferias, son la materialización del trabajo y lucha de millones de familias explotadas por el capitalismo, pero al mismo tiempo se han consolidado, poco a poco, como espacios fundamentales para vivir y conquistar territorios apoyados por la acción colectiva y la movilización social, que el Estado del capital ha tenido que ir reconociendo. Son estos barrios, fruto de la producción social del espacio de forma artesanal, del esfuerzo laborioso, los que se convierten en territorios de resistencia, dentro de ciudades que tienden a excluir a las mayorías.

Pero justamente, la incapacidad de las economías formales de cooptar al grueso de la población trabajadora, ha generado que la ciudad cumpla otro papel fundamental para la reproducción del capital: la creación de masas de desempleados, o ejercito laboral de reserva, que disminuye el valor de la mano de obra y los salarios; con ello, se disminuyen los costos de producción para facilitar la producción de plusvalía, de tal forma que la ciudad encarna espacialmente la contradicción de la generación de riqueza a partir de las penurias de la clase trabajadora. Ello es especialmente cierto, cuando la informalidad laboral en el país se acerca al 70% de la población económicamente activa, a lo que debe sumarse las cifras de desempleo que son de alrededor del 10%.

Por tanto, el desempleo y la informalidad se presentan como una realidad contundente en las ciudades colombianas, pero son en estas mismas donde se concentra la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB). Tanto así que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, concentran, en suma, cerca de un cuarto de la población nacional, pero en ellas se moviliza y reproduce más de las ¾ partes del PIB. En resumen, la ciudad colombiana, es producto del desarrollo de la acumulación del capital, expresada en una segregación urbana alarmante e inmoral, es el resultado de la puesta en práctica del ordenamiento entorno al gran capital en las concentraciones urbanas.

Los trabajadores son sistemáticamente ubicados para soportar los embates de la caótica vida urbana: atascos, violencia, contaminación, negación de los equipamientos básicos, distanciamiento de los centros de poder y de prestigio urbano. Por su parte, los lugares del capital, ocupan los centros y las centralidades urbanas, espacios donde el valor del suelo tiende a elevarse y por ello se convierten en espacios sujetos a la codicia empresarial de los conglomerados.

Para apropiarse de los mismos, los poseedores del capital generan diferentes mecanismos de desplazamiento de la clase trabajadora, proceso que es conocido como gentrificación o aburguesamiento, y del cual las grandes ciudades del país han sido testigos.

La gentrificación es justamente ese proceso por el cual áreas que se convierten en zonas claves dentro del desarrollo urbano, por su ubicación o por las potencialidades económicas que generan, son apropiadas por el gran capital, en miras al usufructo, en detrimento de los intereses de la clase trabajadora.

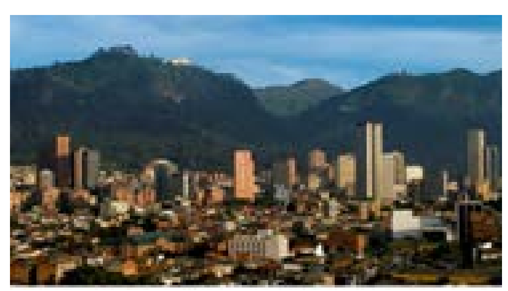


Los centros o centralidades que se convierten en áreas prestigiosas de la ciudad, son sistemáticamente sometidas a situaciones diseñadas para la expulsión de la población trabajadora. En el centro de Bogotá, como en otras ciudades, la estrategia utilizada para este fin, ha sido el deterioro progresivo de las condiciones de habitabilidad para los pobladores tradicionales, por medio del abandono, la generación de zonas de terror, sujetas a la violencia de las

bandas criminales que intimidan y amenazan en la cotidianidad a los habitantes.

Ese deterioro conduce a un proceso de desvalorización de los predios dentro del mercado, a la inseguridad en la tenencia y un desespero que lleva, tarde o temprano, al desplazamiento de los pobladores tradicionales. Una vez sucedido esto, se generan y diseñan megaproyectos urbanísticos, por lo general impulsados con el auspicio de los grandes capitales inmobiliarios y gobiernos conexos a los mismos, como sucede actualmente en la alianza Peñalosa- Grupo Aval, con el fin de apropiarse de los territorios estratégicos pero "desvalorizados", en ese momento se da vía libre para el desarrollo de proyectos urbanísticos de gran cuantía y magnitud, que terminan por generar enormes ganancias al sector de la construcción, las empresas inmobiliarias y el sistema financiero que la apalancan, al tiempo que desplazan a la población tradicional sin recursos suficientes para acceder al mismo territorio que antes ocupaban pero que ahora se ha valorizado, es decir, aburguesado (gentrificado).

Los megaproyectos urbanos, consolidan así una estrategia de clase, por medio de la cual, las capas sociales son ubicadas de acuerdo a su posición dentro de la estructura productiva. En esta misma medida, las áreas metropolitanas, es decir, las áreas que articulan las grandes ciudades con sus municipios cercanos, se segregan ratificando la desigualdad social. Las masas de la población trabajadora terminan por asentarse en proyectos masivos de vivienda, ubicados en zonas o



municipios periféricos, lugar también dispuesto para la ubicación de enclaves productivos industriales y para la actividad rentista, como las zonas francas, manteniendo de esta forma la tradicional ruptura de la ciudad clásica capitalista, con barrios obreros segregados y barrios exclusivos para la burguesía, solo que esta vez en una escala mucho mayor.

La combinación de todos estos elementos, en el que las luchas económicas toman un carácter particular, por las disputas y resistencias en el territorio, se vuelven, cada vez con mayor protagonismo, parte fundamental de los escenarios a los que está sujeta la lucha de clases. En efecto, las dinámicas del capital por apropiarse de los medios de producción y extraer mayor plusvalía en el marco de la crisis, se ve enfrentada a procesos de movilización social que buscan garantizar los derechos de la clase trabajadora en las ciudades, las cuales en situación de empleo, desempleo o subempleo agita la lucha de clases, motor fundamental para acrecentar la lucha y resistencia popular en Colombia.





LA REPRESIÓN COMO MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO DEL GRAN CAPITAL



Si bien la industrialización del país no fue acelerada, ni logró convertirse en el factor central de la producción nacional desde las últimas tres décadas, a razón de las imposiciones hegemónicas de los países industrializados, también es verdad que en la actualidad la mayoría de la población trabajadora de Colombia se ocupa en actividades económicas urbanas, algunos en el sector fabril, como obreros industriales, otros como obreros empleados de las empresas prestadoras de servicios y del comercio, y una enorme porción en las actividades informales, producto de las debilidades históricas de la economía nacional dependiente.

En este sentido, la burguesía nacional y transnacional ha generado estrategias de posicionamiento en las ciudades, dentro de su estrategia de clase. En las urbes, efectivamente, se encuentran los centros de poder administrativo, tanto estatales como del capital privado, que facilitan la generación de enclaves político-económicos para la reproducción del capital. Allí también se encuentran las sedes de los Conglomerados Financieros que generan economías de escala, para la conexión al mercado mundial, permitiendo la imposición del capitalismo global como orden imperante para la sociedad colombiana. Igualmente, las ciudades concentran al sector financiero, que es actor fundamental y pieza clave para la reproducción del capital y la circulación del dinero, así como para el desarrollo del sector de la construcción, activado a causa de la re colocación de capital en el marco de la crisis.

Pero también en las ciudades se encuentra concentrada la clase proletaria, aquella que con su fuerza laboral genera la riqueza que es apropiada por las empresas, bien sea por medio de la vinculación formal, o por medio de una explotación indirecta, pero significativa, en el renglón de la informalidad.

Por tanto, la ciudad es un espacio fundamental en el desarrollo de la lucha revolucionaria por parte de la clase trabajadora, pues en ella se administra, organiza, y dinamiza la maquinaria político-económica que permite al gran capital gobernar sobre las vidas de la mayoría; además, porque son los escenarios urbanos el lugar de existencia propio del grueso de la población nacional.

Como resultado de las desigualdades estructurales, las ciudades no solamente son espacios de concentración masiva de la población y las actividades económicas; son también el escenario donde se concentran las contradicciones y confrontaciones de clase. Por esta razón, en las ciudades se facilita evidenciar las desigualdades sociales, pues en estas áreas relativamente cercanas y densas, se exponen con crudeza la riqueza apabullante de la burguesía y la miseria a la que el capital condena a la población trabajadora.

En consecuencia la ciudad que se desarrolla en el marco del capitalismo, es producto de la estructura social de clases que refleja en sí el conflicto social. El resultado de esta exposición de las desigualdades y por tanto del conflicto social en el escenario urbano, genera, como es lógico: violencia; la cual se expresa de maneras diversas y en grados heterogéneos. La violencia estructural, por ejemplo, se manifiesta por medio del orden urbano, gracias a la distribución desigual de la riqueza contenida en las ciudades. Así, las zonas privilegiadas, dotadas de servicios y espacios para el goce de los mejores paisajes urbanos, son aprovechados por la clase dominante, ello se aprecia con claridad en el caso de las ciudades colombianas, que son enormemente segregadas.



Detrás de esta organización segregada de los espacios urbanos, se encuentra el capital inmobiliario que manipula el precio del suelo urbano y del espacio construido, por medio de la generación de monopolios de las tierras disponibles y de los proyectos de construcción. Ello implica un aumento de los costos de la vivienda en las grandes ciudades, perjudicando a la población trabajadora y acaparando terrenos focalizados por su potencial rentístico, lo cual, adicionalmente, implica una amenaza a los ecosistemas y las áreas rurales cercanas a las ciudades, tal como sucede en las grandes y medianas ciudades colombianas.

En forma contradictoria la clase proletaria que es a la que se le asigna la generación del esfuerzo necesario de la construcción material de la riqueza urbana, es condenada a vivir en áreas carentes de condiciones para el disfrute de la vida de la ciudad, que son por lo general en zonas periféricas que están espacialmente alejadas de los centros de poder económico, de las áreas productivas y los lugares donde se produce la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología y otros elementos propios de los avances sociales que concentran las ciudades.

Para que tal segregación que fomenta la desigualdad y las injusticias sociales sea posible y perdure en el tiempo, las clases dominantes generan toda suerte de mecanismos de control y dominación sobre los trabajadores en el territorio. Así, la vigilancia privada, la disposición espacial de la fuerza estatal, la generación de fronteras materiales y simbólicas, la accesibilidad limitada y exclusiva a determinadas áreas de la ciudad para los sectores poblacionales privilegiados, entre muchos otros mecanismos de presión, control y coerción social, son generados por la clase dominante para postergar sus privilegios.

Por ello se debe anotar que las modificaciones y transformaciones que los aparatos represivos del Estado están generando, se proyectan en miras a un mayor control de la acción de la población, como por ejemplo la doctrina Damasco del ejercito, que comandado por los Estados Unidos, responde justamente a una focalización de la fuerza para paliar las acciones revolucionarias del pueblo en los fluctuantes escenarios actuales, entre ellos, las posibilidades de acción generadas en la movilización social urbana.

Pero dado que una significativa parte de la población es explotada a razón de la concentración de la riqueza en pocas manos, se genera un tercer tipo de violencia que es sufrida principalmente por las clases trabajadoras. Se trata de la criminalidad urbana, que es causa y consecuencia de la rapiña generada por la búsqueda de las condiciones que permitan la sobrevivencia.

Así se propaga el fenómeno del lumpen, que traduce en furia las acciones del proletariado en contra de si misma, impidiendo así, que se promueva la conciencia de clase y con ello se favorece los intereses de la oligarquía que encuentra, incluso en sus explotados, un respaldo a políticas y acciones que fortalecen el aparato militar, las acciones represivas y el control territorial por parte de la alianza Estado-capital (por ejemplo, el Nuevo Código de Policía y la Ley de Seguridad Ciudadana). Situación que se fortalece por la percepción equivoca de las denominadas clases medias, que suelen alejarse de su conciencia de clase, en razón de su pretensión e ilusión de acercarse a los beneficios que ostenta la clase dominante.

Adicionalmente, la criminalidad se manifiesta de otras formas mucho más sofisticadas por medio de la configuración de lógicas mafiosas que, con el consentimiento de los estamentos del poder establecido, promueven poderes de enorme peso en los que se combinan actores estatales, carteles del narcotráfico y grupos paramilitares; todos estos reclutadores de población que no tienen otra opción económica que las de insertarse en los mercados ilegales que también concentra la ciudad, y en especial, de jóvenes que han sido sistemáticamente violentados, sometidos y convertidos en guardaespaldas de las mafias.

En efecto, el tráfico de armas, de narcóticos, la trata de personas y otras actividades ilegales, son negocios que por sus características y rentabilidad son manejadas por un orden paralelo, pero complementario, al establecido por el capital en la órbita de lo legal. Su poder es enorme y por ello, como pasa en el caso de Bogotá, conviven espacialmente, con los poderes corporativos legalmente establecidos e incluso el mismo Estado de la burguesía.

El denominado Bronx, en la capital de la república, es justamente el resultado de la apropiación de sectores estratégicos de la ciudad por dichas mafias, que se resguardan con población obligada a vivir vidas miserables, y que dada su condición resultan bastiones de defensa para la mafia, orquestada por carteles, el paramilitarismo y el Estado. No es extraño que, en consecuencia, las formas en que los gobiernos de derecha atacan esta problemática, tengan como centro, la generación de enemigos aparentes para el proletariado, con el fin de justificar acciones de poder represivo y el fortalecimiento de los aparatos violentos del Estado.



El caso del Bronx, es entonces la articulación de una doble estrategia de clase, de los poseedores del capital. De una parte, son controles territoriales generados a partir de la alianza de fuerzas oficiales y paralelas, sobre áreas económicamente fundamentales dentro de las ciudades. Al mismo tiempo facilita los procesos de aburguesamiento (gentrificación), encareciendo los predios en el centro de la ciudad, que se habían depreciado sistemáticamente por medio de la generación de las denominadas ollas, para promover a largo plazo procesos de gentrificación.

Por supuesto, el problema de las mafias como el de la desigualdad social que caracteriza a las ciudades colombianas, no se supera con mecanismos de presión estatal, dado que es justamente el orden social, defendido por las instituciones estatales y corporativas las que producen y promueven estos fenómenos.

En síntesis, la expresión territorial de las ciudades se modifica, en una constante puja por parte de los sectores poseedores de capital, que procuran la conformación de unas manchas urbanas segregadas,

sujetas a la especulación y la generación de fortunas inmobiliarias y financieras, pero también la disposición de aparatos represivos que se materializan espacialmente. Así en las principales ciudades, se consolidan proyectos de fuertes y cantones militares con bandas paramilitares satélites, estratégicamente ubicados para el control de los centros de poder y los ejes viales estructurantes de las ciudades. Así, Bogotá, Medellín y Cali, cuentan con una disposición espacial militar en crecimiento, dispuesta a resguardar y defender los centros de reproducción del capital.



La acción represiva del Estado del capital frente a la movilización social, va a seguir en aumento, pues dada la importancia creciente del escenario urbano como campo de la lucha de clases, el Estado se re-configura para contrarrestar las acciones de insurrección, que organizada o espontáneamente, seguirán surgiendo en los diferentes escenarios donde el sentir del proletariado se traduzca en hechos concretos de confrontación contra quienes le explotan.

Los diferentes casos de ebullición de la protesta social, como respuesta de las consecuencias de la apropiación por parte del gran capital de los servicios sociales, como la salud, la educación, los servicios públicos, el transporte, entre otras, avizora gran parte de las características sobre las que se concreta el conflicto.

Ejemplo de ello es la creciente ola de manifestaciones surgidas como respuesta de las difíciles condiciones de subsistencia en las barriadas (como ha sucedido en Bogotá con el alza de las tarifas del transporte público). Ello muestra que el Estado ha delegado al sector privado el control del acceso a los servicios, y por tanto ha dejado en el mercado el control de la vida del pueblo. Las deplorables consecuencias de ese sistema, repercuten en una visión del ciudadano como cliente, y cuya garantía de acceso a sus derechos, sólo se da en la medida que cuente con capacidad adquisitiva. A cambio, recibe como respuesta del Estado una enorme represión al inconformismo social; de tal suerte que el servicio al cliente que recibe el ciudadano inconforme, es el cóctel de represión y autoritarismo de la fuerza pública.

Para esto último, la fuerza del Estado se adecua al campo de la protesta urbana, siendo el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), la punta de lanza contra las iniciativas de confrontación popular frente a los abusos generados por el Estado del capital. A esta institución, famosa por los atropellos en contra del pueblo, se le delega gran parte del poder represivo; convirtiéndose en un referente de la arbitrariedad del establecimiento y un símbolo del enemigo de las clases populares.

La ciudad, al ser resultado de las contradicciones propias de las formas más avanzadas del capital, se presenta como el escenario idóneo para el desarrollo de las fuerzas sociales, que, guiadas por la conciencia de clase, se pueden enrolar en las acciones que conduzcan a la liberación del pueblo frente a los poderes con los que el capital somete a los trabajadores. El escenario urbano es, así, un campo de batalla ideológico, político y militar, en el que el pueblo colombiano, en general, y el proletariado, en particular, puede fortalecer la lucha para construir un futuro propio, en una sociedad sin explotación.

LA INSURGENCIA POPULAR:

¡UNA ACCIÓN LEGÍTIMA, UNA RESPUESTA CLASISTA!





Insurgencia de masas



Insurgencia armada

El pueblo en el marco de la **lucha de clases,** ha tenido que dar respuesta con acciones de hecho a los regímenes políticos y de dominación de las clases opresoras, que en el curso histórico de la humanidad han hegemonizado las formaciones económico-sociales.

Esta respuesta de los sectores sociales oprimidos y explotados es de **lucha y resistencia** como clase popular constituyéndose en una **praxis** emancipadora y libertaria; podríamos decir que la insurgencia popular es un método histórico que de forma integral contiene unos elementos que dialogan dialécticamente, dándole sentido, validez y legitimidad histórica.

La insurgencia popular no es un concepto sociológico *de per sé,* sino una necesidad, una opción de vida y opción política en la medida que la pervivencia, la realización espiritual y material del ser humano es un **propósito capital.** En esa lógica, se asume la **rebelión** como la expresión superior y derecho universal de los pueblos ante los regímenes de **dominación, explotación y opresión.** Al concebir la insurgencia popular como un **Método de Lucha y Resistencia,** estamos reafirmando su naturaleza política y por consiguiente ubicándola en su justa dimensión, en tanto, es una acción legítima de lucha y rebeldía.

El primer elemento que connota su esencia es la **identidad de clase.** Aquí no hay margen de confusión, se lucha y resiste como **clases y sectores sociales explotados y oprimidos.** Negarnos es un error, el pertrecho del proletariado es la conciencia de clase, que nos nieguen es un reconocimiento. La

Insurgencia Popular surge de las entrañas del pueblo en defensa de sus intereses.

A partir de esta realidad, el sujeto político colectivo, se concreta en la lucha, para ser protagonista en la superación de la vieja sociedad burguesa y el capitalismo, porque los **objetivos y propósitos** de la Insurgencia Popular son libertarios y emancipatorios, marcando la ruta de su proceso histórico.

Para el logro de metas estratégicas, tácticas y coyunturales, la Insurgencia Popular desarrolla **formas de organización y lucha,** que le permita avanzar a estadios superiores de estructura y acción, en procura de ganar en el seno del pueblo, la dinámica de **Lucha-Unidad-Lucha** hacia la expresión y construcción de los embriones de Poder Popular que fecundará en la Guerra Revolucionaria del Pueblo.



Insurgencia armada

Todo proceso social, político, económico y cultural no sólo tiene unas raíces o fundamentos, sino que se expresa y construye un escenario físico concreto y ese espacio es **el territorio;** que además de ser nodal para afianzar los embriones de poder popular, demanda del sujeto político colectivo la **indeclinable** defensa y permanencia en él.

El Movimiento Popular que se personifica y toma cuerpo en la dinámica del movimiento social, movimiento político y movimiento insurgente guerrillero, en la medida que avanza en la lucha reivindicativa y política, va desarrollando el vínculo **orgánico-político** que corresponde a las clases y sectores populares. En ese avance hacia estadios superiores de organización y lucha, dicha articulación se genera dialécticamente porque se da un proceso cualitativo que va elevando el nivel de conciencia social y política como clase y, se trasciende en los contenidos de lucha, en abierta disputa con el régimen imperante y la institucionalidad burguesa.

El contenido de la lucha, fundamentada política e ideológicamente, producto de una **praxis creadora,** que interpreta los intereses de las clases explotadas, en particular, y la del proletariado en general, no solo genera una articulación orgánico-política, sino que demanda una **vanguardia de clase con conciencia proletaria,** que juegue el papel revolucionario de darle sentido histórico a la lucha y resistencia del pueblo y el logro de sus objetivos de liberación nacional y social.

La forma superior de organización del pueblo, se expresa en la vanguardia de clase, que hace una ruptura con el régimen oligárquico-burgués asumiendo la rebelión como método de lucha y resistencia, con la responsabilidad histórica de animar, acompañar y organizar la lucha de clases e insurgencia popular mediante la relación político-ideológica: **Vanguardia-Masas-Vanguardia**.

Al pueblo, por medio de la insurgencia popular como Método de Lucha y Resistencia, le es inevitable hoy, responder a un Estado y sociedad burguesa que aplica el "terrorismo", aquí corresponde activar la insurgencia popular en sus dos componentes: la insurgencia guerrillera y la insurgencia de las masas.

A la insurgencia guerrillera en Colombia, le ha correspondido el papel de vanguardia revolucionaria político-militar en ruptura total al régimen imperante e institucionalidad burguesa; por su naturaleza política es rebelde en principio y desarrolla la lucha armada como principal forma de lucha, en el

inclaudicable propósito estratégico de la liberación nacional y construcción del socialismo.

La insurgencia de las masas, es una praxis histórica de lucha y resistencia que también tiene una naturaleza política, que se expresa en su espacio social y territorial como pueblo que es afectado por el terrorismo de Estado; una forma de defensa de la vida, el territorio y condiciones dignas de existencia. La insurgencia de las masas son todas las manifestaciones de lucha y defensa que las masas oponen a la brutal agresión del régimen oligárquico-burgués de dominación, explotación y opresión.

Las formas y manifestaciones de lucha y defensa de la insurgencia de masas deben legitimarse, en la medida que ellas son víctimas de la barbarie del capitalismo y la sociedad burguesa. Además debe ejercerse y generalizarse como respuesta legitima y necesaria para su pervivencia y acción política. Por lo tanto, corresponde desarrollar la fuerza social y política, como también la fuerza militar de masas, elementos esenciales en la insurrección general y en la toma del poder para el pueblo.

La unidad de las vanguardias y la unidad de las masas son una condición para el triunfo de la revolución y para la consolidación del Bloque Popular y Revolucionario. Unidad que se debe dar en el principio dialéctico Lucha-Unidad-Lucha y en el **proceso indisoluble** de la insurgencia popular.

¡ A luchar y avanzar con la insurgencia popular!



Insurgencia de masas





LATIFUNDIO CAPITALISTA, AGROINDUSTRIA Y REPRESIÓN



Cultivo de arroz en Arauca

La región del área del Frente de Guerra Oriental (F.G.O.) en la actualidad pasa por la implantación de un esquema de profundización capitalista que propone 18 megaproyectos de intervención en el territorio, que le permitirá al gran capital anclar iniciativas mediante las cuales se interviene el desarrollo de una región políticamente activa, y ese proyecto se ha denominado desde las oficinas del régimen como Plan Maestro de la Orinoquia (PMO).

Es de esa forma, que un Estado le brinda a los Conglomerados Financieros Transnacionales y Nacionales (CFTyN) todas las garantías para la explotación, no solo del territorio sino que también le da vía libre a la explotación de la fuerza de trabajo. En especial, en un territorio cuya vocación es agrícola y pecuaria, para preparar un ejército de reserva que le garantizará ganancias netas a los CFTyN, y legisla con el objetivo de que la confianza inversionista no se pierda, y así continuar llenando sus arcas con el dinero que se le roba a la clase proletaria y popular.

Los ámbitos de este gran proyecto son cuatro: Desarrollo Productivo Sostenible, Recurso Hídrico y Medio Ambiente, Infraestructura y Logística, y por último, Ordenamiento Territorial; componentes de un discurso amañado y orientado a la explotación a gran escala de la mano de obra, y nuestro territorio en todo el sentido de la palabra, iniciativa que cuenta con una disponibilidad presupuestal de 48,5 billones de pesos, de los cuales solo 4,6 billones están orientados a la transformación del campo. Entonces el Desarrollo Productivo Sostenible, tiene en su componente principal la producción de productos de primera necesidad para la economía mundial, sustentada en el latifundio capitalista dedicado al monocultivo en la región, desde los cuales no se está pensando en la soberanía alimentaria del pueblo colombiano, sino por el contrario, se abona el terreno para la importación de alimentos transgénicos de países con los cuales esta el gobierno y país vinculado comercialmente.

En el caso de la región, y principalmente de las 15,1 millones de hectáreas con potencial productivo, solo se encuentran en uso, según Departamento Nacional de Planeación, 700.329 hectáreas, menos de 5%; al comparar la producción del país con el resto del mundo, hacen surgir la necesidad de implementar un mecanismo que proyecte al gobierno y su economía, en los ámbitos del comercio mundial de los transgénicos.

Por tal razón y ajustados a los estándares internacionales, se hace el paralelo de rendimiento por hectárea del arroz y se puede ver que Colombia se acerca a los mayores productores, pues la producción nacional tiene un margen mínimo de diferencia frente a países potencia en este cultivo, como es el caso de China.

El PMO pretende pasar de 0,7 millones de hectáreas cultivadas a 3,3 millones de hectáreas en 2030, destinándolas a la ganadería en zonas aptas para lograr una oferta sostenible de una mayor cantidad de carne y leche por hectárea; 180 mil hectáreas adecuadas para riego y drenaje; y formación de capital humano para la generación de empleo con mayor valor agregado, esta última con el objetivo de posibilitar mano de obra calificada y barata a través del SENA y otras instituciones del régimen.

"Uno de los principales desafíos para un sistema agrícola y alimentario sostenible y justo en América Latina es la extrema concentración de la propiedad de la tierra. La tierra es además fuente de numerosos conflictos. La lucha por el derecho a la tierra ha estado en el origen de guerras civiles en Colombia y Guatemala y de un golpe constitucional en Paraguay. Estos tres países se encuentran entre los que presentan los mayores índices de concentración de la propiedad de la tierra del mundo".[1]

Los monocultivos son proyectos de gran intensidad de capital que llegan a desarticular la economía campesina y tradicional, y las organizaciones populares que exista en el territorio, pues hace uso de grandes extensiones de tierras, su control y manipulación están en las dinámicas que sus inversores imponen. En el caso puntual del departamento de Arauca, asistimos a un proceso de aceleración de los monocultivos en gran intensidad, como por ejemplo la palma africana que esteriliza la tierra; el maíz, más utilizado en la producción de abonos y por ende, no es para el acceso de la alimentación poblacional; y claro, el no menos importante, el arroz, que si bien es cierto se produce a gran escala y con propósitos alimentarios, su práctica es perjudicial para los ecosistemas que lo rodean y sus procesos de asentamiento popular, ya que no solo trae formas de cultivo externas, sino que también implementa una producción sustentada en la utilización de agrotóxicos, que se aplican sin control ni proyección en el territorio araucano.



3000 nuevos militares llegan a Arauca

La aplicación de agrotóxicos en el cultivo del arroz, tiene como consecuencia la contaminación de afluentes hídricos indispensables para la reproducción de ecosistemas, al ser un cultivo cuya producción precisa de grandes cantidades de agua, también es de destacar que el agua que no se utiliza retorna a sus causes naturales con altos niveles de contaminación, situación que pone en riesgo la supervivencia de la población que accede al preciado líquido para el consumo humano, animal y de producción utilización agrícola. Por otro lado encontramos la fumigación o aspersión aérea, cuyo impacto en los ecosistemas es igual o más lesivo pues, no solo afecta el cultivo del arroz, sino también se dispersa hacia otros cultivos y zonas pobladas.

Al revisar la producción en el departamento de Arauca, nuestra Organización ha podido identificar

1 *www.oxfam.org, informe 180, 23/04/2014*

un fenómeno económico, se trata del *nomadismo agropecuario,* que se refleja en dinámicas de colocación de capitales según sea la necesidad a través de tiempos relativamente cortos en los diferentes departamentos, en los cuales explotan y utilizan los terrenos, para después abandonarlos en condiciones infértiles, pero también traen e implantan los mecanismos de siembra, cosecha y comercialización, dejando de un lado la mano de obra regional y la industria que se pueda encontrar.

Este nomadismo se ha presentado en el Tolima, Meta, Casanare y ahora avanza hacia Arauca, pues el cultivo intensivo de arroz, genera un gran e insostenible problema ambiental, económico y cultural, todo este proceso condicionado y dirigido por Conglomerados Financieros Nacionales (CFN), quienes utilizan a pequeños productores arroceros como trampolín, para así llegar al monopolio y control de la producción de arroz, implementando y aplicando los agrotóxicos y por ende trayendo estos problemas al departamento.



La región en la actualidad cuenta con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia), quien tiene en sus funciones velar por la preservación del medio ambiente y por ende es la encargada de aprobar y licenciar la utilización de bosques y captación de aguas. También es quien controla que estas licencias y permisos se desarrollen si afectar los ecosistemas y al medio ambiente, tarea que desarrolla de manera contundente frente a campesinos y pequeños productores, con la aplicación de comparendos ambientales, que significan multas económicas, reduciendo la posibilidad de producir de manera artesanal y con mano de obra obrera de pueblos y veredas. En cambio, esta corporación posibilita al gran capital su desarrollo, licenciando y permitiendo las acciones que a los pequeños productores les son negadas.

En el mismo camino se hace posible el diseño de un mecanismo de control social del territorio, en el cual se ponen en uso los pactos con hacendados, finqueros y pequeños propietarios de la tierra en las sabanas de los municipios de pie de monte y sabana, generar un proceso de blindaje social y agropecuario que les permita circular con tranquilidad por el territorio, dando cabida a la consolidación de la militarización, paramilitarismo, la creación de bandas criminales y la descomposición social en el territorio.

La producción extensiva e intensiva de arroz, antes que significar disminución sustantiva del precio en la canasta familiar, por el contrario, la incrementa, haciendo que la comunidad entienda que el desarrollo económico en general, proyecta menos capacidad adquisitiva y más endeudamiento y rebusque popular, pues la utilización de máquinas y aviones en este cultivo desplaza al proletario jornalero y a campesinos, pues la dinámica industrial que se implanta no deja espacio a la contratación con garantías, y hace que este producto este cada vez más lejos de los habitantes de la región, percibiendo esta actividad como una economía extranjera y sectaria.

La militarización enmarcada en la guerra contra insurgente, hoy aparece como la garante de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, pero también usurpando funciones de la autoridades civiles, implementando la inversión social, y permeando la actividad social y popular con actividades cívico militares, que copta la voluntad del pueblo más vulnerable y golpeado por la falta de atención gubernamental; realidad social y militar que dinamiza la consolidación del gran capital en el territorio y abre la talanquera a una nueva incursión

paramilitar, que ya se refleja con las capturas de paramilitares en Arauca capital y amenazas a líderes sociales.

El paramilitarismo ha sido una acción integral que los capitales nómadas de la producción agrícola incorporan a sus actividades de consolidación agroindustrial, permitiéndoles tener seguridad privada a disposición para someter y controlar la población de los territorios donde desarrollan su actividad, quienes a su vez, traen el establecimiento de ollas de micro tráfico que generan descomposición social (prostitución, drogadicción, alcoholismo, hurto, entre otras), la consolidación y control de bandas criminales y la persecución al tejido social, como ha sucedido en los departamentos del Meta y Casanare.

La Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), son resultado del proceso de priorización que el capital ha generado de la mano de los gobiernos Uribe-Santos para establecer enclaves económicos, este proceso inicialmente se desarrollará en las regiones que históricamente han contado con el abandono total del Estado, queriéndolo mostrar como el desarrollo económico y social del territorio. De esta manera, impulsan un nuevo y profundo ciclo de acumulación de la tierra en manos de tradicionales terratenientes y los CFT como CARGILL, Mónica Semillas, entre otros.

Sin embargo al revisar el modelo que se utilizará para este propósito, encontramos que se pretende imponer desde la ley un mecanismo de sociedades, para que los pequeños productores cambien la vocación agropecuaria de la tierra y se vinculen al modelo de los monocultivos. Esta realidad trae consigo algunos elementos que podemos relacionar de la siguiente forma:

1. Los pequeños propietarios al no tener acceso a industrialización se verán obligados a arrendar sus tierras, y por ende se convierten en socios minoritarios de la producción.
2. La potencialidad de la perdida de las tierras es alta a través de mecanismos de endeudamiento, de mercado, jurídicos y paramilitares.
3. Al no poder producir sus tierras, *harán la transición de propietarios a proletarios del campo*, pues estarán obligados a vender su fuerza de trabajo para la explotación de lo que fueron sus predios, y así, sujetos a salarios irrisorios y degradantes.
4. Una gran mayoría de estos campesinos ni siquiera serán proletarios de campo, convirtiéndose en desplazados en las cabeceras municipales de la región.

Toda esta dinámica de circulación del capital, requiere de un tejido social disperso y por ende poco politizado, que le permita la menor resistencia y mayores niveles de explotación, lo que se logra con la puesta en marcha de toda una estructura que va desde la individualización, cooptación, estigmatización, judicialización y persecución a la dirigencia social, hasta los asesinatos, desapariciones y atentados contra el tejido social.

Por tal razón, no podemos hacer apología a las bondades de la agroindustria del arroz y el gran latifundio capitalista, y por el contrario deberemos defender y *proyectar la economía campesina hacia formas superiores de producción y cooperación social* que permitan una defensa más efectiva de los habitantes y su región.

Como pueblo en armas continuaremos en la vigilancia revolucionaria para que la pervivencia en la región esté mediada por condiciones de respeto al medio ambiente, prácticas ambientales sanas, la defensa y protección del territorio de los impactos militares, paramilitares y de la corrupción que genera el gran capital. Por tal razón estaremos en pie de lucha junto al pueblo en la construcción del socialismo.



DESPIERTA COLOMBIA, NOS ESTÁN ROBANDO LOS RÍOS





Río Sambingo, Chocó Colombia

En el mundo capitalista, a Colombia le corresponde el papel de productor primario a cambio de armas y tecnologías, perspectiva que se consolida con la gesta libertadora contra España, al quedar endeudados con Inglaterra cuyos empréstitos deberían pagarse con materias primas. Desde entonces la oligarquía colombiana, en una actitud anti soberana, entrega recursos no renovables, piedras preciosas, biodiversidad y fibras sin importar o no la conveniencia de su explotación. Por esa vía, la Nación es sometida a cumplir las exigencias de la política económica del mercado global, a la vez que la oligarquía prefiere recurrir a la explotación de las materias primas en función de sostener su tasa de ganancia, limitando los avances industriales nacionales y reculando en desarrollar una política minero energética y de producción soberana acorde a las necesidades del país.

Lo anterior ha obligado a los campesinos a expandir en forma recurrente la frontera agrícola, escenario en el que por medio de la fuerza los terratenientes han resultado gananciosos. Concentrada una vez la tierra, los terratenientes en asocio con los Conglomerados Financieros Nacionales e Internacionales (CFN y CFI) se sostienen de la explotación minero energética en suelos agrícolas o de protección. La produción primaria en función del gran capital rompe el equilibrio social y ecosistémico del entorno, generando: erosión, sequia, pérdida de productividad agrícola, desempleo, hambre, miseria y hasta la muerte de ríos.

La pérdida de ecosistemas y desvíos de los ríos están asociados a la política de acumulación de capitales. En ese sentido, año tras año se presenta una disminución paulatina del caudal hasta el punto de secarlos, como sucedió con el río Sambingo declarado muerto en 2014, que era uno de los afluentes más importantes de la cuenca del rio Patía, en el departamento del Chocó; el Sambingo fue devastado por los dragados para la extracción de oro y platino al servicio de carteles y mafias del oro, o de estructuras paraestatales como los Rastrojos,

Urabeños, Clan Usuga, Clan del Golfo, y Águilas Negras, formas mafiosas de acumular capital, por demás asociadas al narcotráfico. Solo en 2014 los grandes mineros arrasaron con más de 10.000 hectáreas de bosques, y envenenaron con grandes cantidades de mercurio y de cianuro ocho de los principales ríos de ese departamento.

Por eso, hasta la Defensoría del Pueblo ha reconocido que los ríos Atrato, San Juan, Andágueda, Bebará, Bebaramá, Negua, Tutunendo y Quito[1], están gravemente contaminados con mercurio y cianuro, además de que sus cauces fueron desviados por la intervención de los complejos para la minería. Los ríos afectados, son los que suministran agua de consumo, baño, lavado de ropa y pesca a los habitantes del Chocó. Al mismo ritmo desenfrenado que crece la presencia de dragas y motoniveladoras en la región, crecen enfermedades como: tos persistente, diarrea, fiebre, afecciones arteriales, edema pulmonar, dermatitis y abortos espontáneos con malformaciones genéticas. Condoto, Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro son los municipios más afectados.

A 2016, eran más de 200 los entables mineros que estaban en funcionamiento y que usaban al menos 60 dragas, casi tres veces más de las que había en 2012. Para dimensionar el enorme daño que ocasionan, basta citar que tan solo en la cuenca del San Juan han sido arrasadas 62.000 hectáreas de bosques, el equivalente a 124.000 campos de fútbol[2]. Según datos oficiales, la producción de oro en el Chocó pasó de 851 kilos en 2004, a 16.925 en los primeros nueve meses de 2015. De las 310 toneladas de oro que el país exporta cada año, 83% se extrae de minas que vierten a los ríos *205 toneladas de mercurio*. Empresas como la estadounidense *Republic Metals Corporation* y la suiza *Metalor* son las encargadas de comercializar el oro, funcionando como cómplices de las mafias y por ello responsables del deterioro ambiental.

Al norte del país, en la Guajira, empresas como BHP Billipton, Extrata, Glencore y Angloamerican adelantan el desvío de 32,8 kilómetros del río Ranchería, con el objetivo de extraer 500 millones de toneladas de carbón, afectando al único río del departamento. Por eso, como lo afirmó un periodista, "el rio Ranchería se lo han robado en beneficio de los megaproyectos". En 2010 construyeron la represa "El Cercado" con una capacidad de 198 millones de m^3, que son destinadas al regadío de cerca de 4.000 has de cultivos en latifundios capitalistas de palma y arroz.



La concesión de aguas del Río Ranchería, en la zona centro es de 25 litros por segundo. Sin embargo, el gasto para regar las vías en el intento por aplacar el polvillo del carbón en el aire es de 17.000 metros cúbicos por día, lo que equivale al consumo de 450 mínimos vitales de agua en un mes. Lo que implica una clara competencia y acaparamiento frente a usos del agua asociados a la supervivencia humana.

En contraste, el pueblo Wayuu no cuenta con la misma garantía concedida al gran capital, por lo que la comunidad muere de sed, aunque esté al lado del agua. Cerca de tres niños Wayuu mueren diariamente por falta de agua y alimento, provocándose el

1 Defensoría del Pueblo, revista semana, http://www.semana.com/opinion/articulo/mineria-ilegal-en-choco-causa-danos-en-medio-ambiente-en-los-habitantes-opinion-german-manga/452703-3

2 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IAP), revista semana, http://www.semana.com/opinion/articulo/mineria-ilegal-en-choco-causa-danos-en-medio-ambiente-en-los-habitantes-opinion-german-manga/452703-3

fallecimiento de 4.770 niños en los últimos 8 años[3]. La prioridad del agua dulce en el mundo debería ser el consumo humano, sin embargo, se utiliza en función del extractivismo y la agricultura de gran extensión que beneficia a empresas de Australia, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y Canadá, y grandes capitalistas nacionales. Los Wayuu toman aguas de los pantanos mientras el gobierno da prioridad a los megaproyectos.



La sed que padece el pueblo Wayuu ocasionó una presión social que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2015, a solicitar al gobierno colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayuu. La respuesta del gobierno en ese sentido fue la realización de un show mediático, ofreciendo como solución unos pozos profundos, respuesta que no soluciona la situación y mantiene la política de favorecer a los potentados.

La extracción de hidrocarburos incrementa el deterioro hídrico del país. Las aguas subterráneas son modificadas en sus cursos naturales debido a explosión sísmica, usada principalmente en su búsqueda. Las petroleras captan agua limpia para inyectar en los pozos de producción en una cantidad equivalente a la producción de barriles de petróleo, a fin de extraerlo a mayor velocidad y con menos costo. Según la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las petroleras consumen cerca de 2.000 l/s[4], un equivalente a la misma cifra de agua que utiliza toda la población de Casanare en el mismo tiempo.

Además, por cada barril se extraen también hasta 90 barriles de agua, en las sabanas de la Orinoquía, líquido que en ese proceso se contamina y se libera sin tratamiento. De ese modo el nivel freático disminuye, y con ello la capacidad de que arroyos, caños y quebradas resistan los veranos anuales. La Orinoquía es entonces un gran acuífero de reserva mundial al que no se le debe extraer petróleo por las afectaciones ecosistémicas, y tampoco se debería ver amenazada por la aplicación del Plan Maestro de la Orinoquía en beneficio de la agroindustria al servicio de los CFN y CFI.

En el oriente, en Arauca, la Occidental de Colombia (OXY) montó plataformas de perforación, producción y transporte sobre el complejo hídrico del Lipa, conocido así por contener una cadena de estéros o humedales. El IGAC determinó que el 50% de territorio araucano obedece a un gran humedal considerado patrimonio espiritual y cultural de las comunidades indígenas existentes. Pero las petroleras desde 1986 están intoxicando estos ecosistemas con volúmenes de vertimientos y otras prácticas contaminantes. Con la extracción han envenenado el agua, al punto de no ser apta para el consumo de ninguna especie animal o humana.

A causa de ello, poblaciones como los Sikuanis e Hitnu, que centenariamente han vivido en el *santuario de flora y fauna de la laguna del Lipa*, han visto seriamente afectado su modo de vida, siendo colocadas al borde de la extinción por la contaminación, la falta de agua y alimento. Por eso, desde que inició la explotación petrolera, son múltiples las denuncias realizadas por el pueblo araucano en este sentido. No obstante, el gobierno

3 Video el río que se robaron, Gustavo Guillén, 2015.

4 Atención preguntas ejercicio de rendición de cuentas ANLA - 2013

hace oídos sordos a la situación, porque su misión es proteger el negocio.

Casanare no escapa a estos problemas, los monocultivos del arroz y de la palma colindan con campos petroleros. Estos, contienen piscinas de oxidación, las cuales, en tiempos de invierno se rebozan y afectan las aguas de esteros y morichales, al igual que la fauna y flora de sus ecosistemas, como se ha podido comprobar con el caso del estero Matemarrano en el municipio de Orocué, donde además de la afectación por los monocultivos, la empresa Pacific Rubiales ha instalado una plataforma petrolera dentro la ronda del estero, todo ello en complacencia de las autoridades ambientales y judiciales. De la misma forma, se han comprobado casos de contaminación por vertimientos de aguas residuales de la industria petrolera en las cuencas de los ríos, afectando acuíferos emblemáticos para los casanareños como el río Pauto, Cravo Sur, Unete, entre otros.

Uno de los casos más sonados en los últimos meses, y que muestra el nivel de agresividad de la política minero energética a costa del agua y de la vida, es el del campo petrolero El Portón, concesionado a la canadiense Gran Tierra. Campo que tiene una perspectiva de explotar 120 pozos petroleros en los municipios de Aguazul y Yopal, proyecto rechazado en 2007, y reactivado a fines de 2016, por afectar la expansión urbana del municipio de Yopal, y amenazar la existencia de los acuíferos naturales en pozos profundos, con los que hoy se abastecen más del 60% de la población, unos 70 mil habitantes, desde que colapsó la planta de agua potable en 2011.

Los casanareños, mediante la movilización popular han rechazado el proyecto, mientras el gobierno nacional mantiene la decisión de su ejecución.

Además, en Casanare son frecuentes las denuncias de habitantes de las sabanas por el grave deterioro que ocasionan a los ecosistemas las fumigaciones sobre los cultivos de arroz, mediante vuelos de avioneta. Es de anotar que, entre los cultivos de palma (permanentes) Arroz (transitorios), los proyectos petroleros y ganaderos utilizan el mayor volumen de agua en la región, lejos de la usada para el consumo humano. Teniendo en cuenta los usos globales en el sector agrícola, el más representativo es el de la palma, o cultivos permanentes, cuyo consumo asciende a 127.000l/s, seguido del sector arrocero, transitorio, con un consumo cercano a los 75.000l/s[5].

De los proyectos con licencia en el departamento de Casanare, 122 cuentan con permiso de captación, 92 autorizados para captar agua superficial, y 32 autorizados para captar aguas subterráneas, siendo el caudal otorgado oscilante entre 4,1 y 12 (l/s) según sea de tipo industrial y/o doméstico. Márgenes que son rebasados porque los sectores pecuarios, e hidrocarburos presentan consumos superiores a los concedidos llegando a 2.000 l/s cada uno[6]. Y aún más, en la actualidad hay cerca de 70 captaciones ilegales para los arroceros o palmeros. Por ello se puede afirmar que los ríos como Cravo Sur, Pauto, Cusiana, entre otros, los están desviado y secando a favor del gran capital. Estas son las razones que empujan a la comunidad casanareña a rechazar los proyectos y exigir de las autoridades ambientales real control.



5 Atención preguntas ejercicio de rendición de cuentas ANLA - 2013

6 Atención preguntas ejercicio de rendición de cuentas ANLA - 2013

No muy lejos, El lago de Tota, considerado el segundo en Colombia, se encuentra en riesgo, porque su oferta hídrica es de 1.500cm^3 l/s, mientras la demanda actual es de 2.400 cm^{3}l/s[7]. El agua se usa para la siderúrgica de Paz del Rio, y para las empresas del hierro y carbón como Votorantin y Holcim, demanda que es superior al consumo de los acueductos de Sogamoso, Iza y Cuitiva. Además, en la última década, los cultivos de cebolla le han quitado por lo menos 100 hectáreas de la zona de ronda, y los químicos usados en este cultivo se asientan en el subsuelo mezclándose con el agua, generando nefastas consecuencias a la salud.



Campesinos de la región han dicho que desde el 2002 la claridad del agua ha disminuido, pues hace 15 o 20 años era posible ver las plantas acuáticas del fondo de la laguna. Y no es para menos, al año, se cultivan 3.000 toneladas de cebolla junca, siendo uno de los mayores productores el senador conservador Jorge Hernando Pedraza y las familias en las que se distribuye el poder de la región.

La amenaza crece, pues empresas petroleras como la francesa Omega Energy han realizado sísmica cerca de la ronda del lago. Los campesinos y pobladores rechazan enérgicamente esta actividad por que coloca en riesgo la estabilidad geológica de la región, al igual que la actividad hídrica. Hoteles de cadena como Aviatur, Decamerón, entre otros, complementan la amenaza, a través del negocio del "ecoturismo", que semanalmente promueve un impresionante arribo de vehículos a la zona de Playa Blanca, lago de Tota.

Con los anteriores ejemplos, y sin mencionarlos a todos, porque son muchos, podemos decir que los ríos, arroyos, nacimientos de agua, quebradas y lagos están siendo desviados o secados por los CFN y CFI dejando problemas sociales y ambientales irreversibles. En ese orden, las empresas beneficiadas con los megaproyectos son mentirosas, la responsabilidad ambiental empresarial es una falacia de los saqueadores y una farsa ante el pueblo. El gobierno oligárquico aumenta la represión contra el pueblo haciendo oídos sordos a sus justos reclamos, hasta el punto de no escuchar lo que se conoce como una muerte anunciada, ejemplo de ello ha sido la catástrofe en Mocoa, fruto de la actividad forestal y extractiva.

Como Ejército de Liberación Nacional rechazamos la muerte a la que son sometidos poblaciones y ríos para sostener la tasa de ganancia capitalista. Alentamos las luchas populares en defensa de los recursos de la sociedad, e instamos a levantar las banderas por una política soberana de producción y desarrollo que supere la acumulación de capitales, la hambruna, la desigualdad social y los problemas ambientales, programa básico que solo es posible en el socialismo.



7 Estudio de Corpoboyacá.

EL PILLAJE EN LAS FRONTERAS MARÍTIMAS



Cuando hablamos de fronteras calientes colombianas, casi siempre nos remitimos a las relaciones fronterizas terrestres con Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú, pero hay una frontera cálida y apetecida por su ubicación geográfica en el mar caribe o pacífico. El despliegue publicitario de las empresas que se adueñaron de la idiosincrasia y hábitat de la población raizal de los pueblos costeros, comercializa paquetes turísticos, recorridos por lugares "paradisiacos" artificiales o históricos, hoteles de lujo, playas privadas frente al mar, aire, descanso, relajación, bufets, cocteles y mucha diversión.

Ningún plan ofrece: visita a los barrios populares, periféricos y marginales. "Allí corres peligro" y por supuesto que es peligroso que el turista conozca la forma deprimente como vive la población: sin servicios públicos, casas de paroid, niñez con alto grado de desnutrición, calles sin pavimentar, aglomeraciones en los buses de servicio público con pasajes costosos, la gente corriendo hacia el rebusque diario cerca a las playas, en la informalidad de la venta de artesanías, dulces, comidas y bebidas típicas, guías turísticos, mototaxistas, caletas en el cargue y descargue de barcos, o trabajando extenuantes turnos en los hoteles por un salario mínimo; mientras empresarios y gobiernos locales corruptos engrosan sus chequeras internacionales, en los paraísos fiscales de los bancos de Panamá y las Islas Caimán, principalmente.

Pero el problema no sólo es un paquete turístico, ni la pobreza producto de la corrupción y el desempleo; son dos mares, dos fronteras marítimas donde el pillaje campea desde tiempos invasores coloniales. En la frontera atlántica, región portuaria del Caribe colombiano, las exenciones de aranceles y bajos impuestos a los emporios empresariales del capital transnacional aumentan sus ganancias; en la zona franca de Barranquilla y la Cayena, Cartagena y Santa Marta, les ofrecen asesoría en los incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior: “20% Impuesto de Renta, 0% de IVA y aranceles en bienes extranjeros, 0%de IVA en bienes nacionales para productos como autopartes, químicos, textiles, combustibles, maquinaria en general, equipos electrónicos, programas de informática, artículos y utensilios de uso doméstico, equipos en salud, etc”[1]. Mientras los compradores de estas mercancías deben pagar el 19% de IVA.

1 www.zonafrancalacayena.com/

El pillaje transnacional no está lejos de la costa caribe: por vía aérea a 2 horas y media de Estados Unidos 1.800 km, a una hora del canal interoceánico de Panamá, y 7.200 km a Europa, en realidad no es una Zona Franca y plataforma de intercambio comercial es el punto de salida final donde la flagrancia de la rapacidad la oficializan en leyes, decretos y resoluciones estatales como acuerdos comerciales internacionales que obedecen las políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.

En Santa Marta, la multinacional Drumond y otras empresas saquean el carbón del Cerrejón, envenenan el aire, el agua, afectan la vida marina y humana con el polvillo que vierten las góndolas transportadoras hasta los barcos cargueros estacionados en el mar. Son miles de toneladas de materia prima, obtenidas con el trabajo de los obreros carboneros, explotados y precarizados por la represión de la empresa, es público el cuestionamiento jurídico por financiar el paramilitarismo para asesinar sindicalistas de Sintracarbón y prestar sus aeropuertos para la salida de narcotráfico; los programas de inversión social y ambiental son mínimos o inexistentes donde la niñez y población guajira mueren en el abandono estatal, sin agua potable, salubridad, vivienda y alimentos mientras empresarios y políticos corruptos aumentan sus ganancias o pisan los estrados judiciales de Colombia, solamente para mostrar sus rostros, sin ley que los juzgue y condene.

En esta ola de muerte que causan las transnacionales en la frontera caribe, no se puede olvidar la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de 1928, el capital de la United Fruit Company impregnó la plaza principal y las calles de Ciénaga Magdalena con la sangre de los obreros y obreras de los cultivos del banano, el sudor y fruto de su fuerza de trabajo desfiló hacia la tumba marina en cada uno de los vagones del tren carguero, ese día fatídico no llevó su acostumbrada carga, sino miles de seres humanos que levantaron su voz de protesta por la injusticia social y explotación laboral a que eran sometidos.

En Cartagena: la apertura de "el canal alterno" permitirá la entrada de barcos de gran calado a la bahía, -avance del desarrollo dicen los políticos y empresarios-, -amenaza, desplazamiento y destrucción- gritan los corales "gamines" ecosistema marino sobreviviente a la contaminación costera.

La vida marina y humana no importan ante las soterradas campañas políticas a la presidencia de la república. En Julio de 2015, Germán Vargas Lleras, como Vicepresidente de la República, anunció $60.000 millones de pesos para iniciar la construcción del segundo canal de acceso a la bahía de Cartagena, para hacer frente a la competitividad y el impacto de la nueva flota marítima mundial, la ampliación del Canal de Panamá, los barcos petroleros y portacontenedores de mayor capacidad, las operaciones de Reficar, considerada la refinería más moderna de Latinoamérica, pero también un fortín de corruptos, la entrada en servicio del Terminal de Líquidos de Puerto Bahía con la importación de gas licuado, y el creciente desarrollo industrial de la ciudad de Cartagena, equivalente al aumento de la pobreza de sus habitantes y la contaminación del lecho marino y la biodiversidad.



En Tolú y Coveñas: En Coveñas se localizan las cloacas petrolíferas succionadoras del subsuelo colombiano. Son las entrañas de Arauca, Casanare y el Meta, oriente, centro y norte de Colombia

de donde OXY, ODC, OCENSA, y OBC aún no terminan de sacar hasta la última gota de petróleo.

En este puerto está el Muelle de Ecopetrol, con capacidad de almacenamiento de 350.000 barriles de petróleo y 105.000 de nafta, alimentado por: oleoducto Caño Limón, a 780 km. Oleoducto de Colombia, ODC, a 438 km desde la Estación Vasconia en Puerto Boyacá (Boyacá), con petróleo de los llanos Orientales y del Valle Superior del río Magdalena en tierras santandereanas. Oleoducto Central, Ocensa, a 837 km estaciones de Cusiana y Cupiagua, en Tauramena y Agua Azul, Casanare. Igualmente, la nafta de la Refinería de Barrancabermeja la transportan por las líneas Galán-Ayacucho 180 kms. Ayacucho-Marquetalia a 26 kms, y Marquetalia-Coveñas 250 kms. Mientras los buque-tanques cargan en promedio 10.000 a 40.000 barriles por hora en la costa atlántica, en el mar Pacífico el petróleo del sur del país sale por las tuberías del oleoducto Transandino con sus muelles en Tumaco Nariño. [2]



Las compañías no tienen restricciones para cargar miles de barriles de petróleo, en caso de accidente el hidrocarburo afecta directamente a los ecosistemas acuáticos, costeros, terrestres y la población del litoral, como ocurrió en el golfo de México, por ejemplo: el *Deepwater Horizon* propiedad de Transocean arrendado a British Petroleum, (BP) hasta 2013, se hundió el 22 de abril de 2010 como resultado de una explosión interna. Y en la plataforma petrolera en el mismo golfo se produjo una fuga de petróleo en el pozo de la (BP). El 15 de julio de 2010 las cifras del derrame oscilaron entre 298.000 toneladas mínimas y 594.000 máximas (de 3.300.000 a 5.200.000 barriles).[3]

Ante esta dramática y voraz fuga de recursos naturales, los sindicalistas de la USO y la comunidad en Casanare lideran luchas sociales y sindicales en rechazo de la explotación petrolera, defensa del agua y por reivindicaciones salariales, ambientales e infraestructura en construcción de carreteras y centros educativos.

El Grupo cementero ARGOS, es otro pulpo económico absorbente de materias primas de nuestro país, con siete puertos en Barranquilla, Cartagena y Tolú, dos en Buenaventura y uno en el río Magdalena, en alianza con la familia Echavarría Obregón y el grupo español Ership con más de 100 años de monopolio en el transporte marítimo. Son tan grandes sus ganancias empresariales que se extiende hacia Estados Unidos, en Washington, Baltimore, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania estableciendo centros de producción de agregados, cemento y concreto, al igual que 2.300 plantas en más de 40 países. Cementos Argos de Colombia y Argos USA firmaron acuerdo con la alemana HeidelbergCement, a través de sus subsidiarias norteamericanas Lehigh Hanson Inc. y Essroc Corp, sus inversiones superan los 2,2 billones de dólares.[4]

Estos son apenas unos ejemplos de la voracidad de las multinacionales norteamericanas, europeas, asiáticas y de cualquier parte del mundo capitalista de donde provengan, se apoderaron no solamente de los recursos naturales de las diversas regiones de Colombia, sino también del trabajo de obreros y obreras, explotados a través de salarios injustos, jornadas laborales extenuantes y mínimo acceso a bienestar social, así como de la riqueza nacional, que por justicia social, debe resolver las necesidades de la población, contaminan el aire donde están las

2 www.ecopetrol.com.

3 Revista Sciencia 2010.

4 www.cementosargos

empresas productoras y procesadoras, matan las costas con hambre y tóxicos, y se apoderan de la frontera marítima que para el capital no tiene límites.

El pueblo desesperado ante esta situación se manifiesta, es el ejemplo de los habitantes de las barriadas en Barranquilla, donde han realizado jornadas de quema de recibos y toma de vías por los altos costos y mala calidad del servicio eléctrico. ELECTRICARIBE es intervenida por la Superintendencia por ineficiente, este hecho deja al descubierto a la multinacional española GAS FENOSA como propietaria, de esa manera denotamos que la época de la invasión y colonización española y países capitalistas no tiene fin, se sofistica y cambia de razón social con propósitos anexionistas.



De manera descarada, GAS FENOSA se declara víctima y demanda a Colombia por mil millones de dólares, por la liquidación de ELECTRICARIBE, amenazan con vengarse a través de los costos del gas domiciliario en todo el país, en tanto que la población se queda con sus electrodomésticos quemados y un cúmulo de recibos sin pagar.

En este panorama fronterizo. ¿Es el agua potable de Buenaventura la mayor saqueada por los barcos y buques con banderas internacionales? Para Hidropacífico es más rentable potabilizar el agua y venderla en dólares, que abastecer a los habitantes que pagan en pesos. El gobierno lo declara primer puerto de Colombia sobre el océano pacífico, Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, punta de lanza de la Alianza Pacífico y Tratado Transpacífico, proyectan la construcción y funcionamiento del corredor vial Ruta Nacional 40: Buenaventura, Eje Cafetero, Bogotá, Villavicencio, Llanos Orientales, Puerto Carreño uniéndose a la frontera con Venezuela. Con todas las consecuencias e impactos que generan este tipo de proyectos en la población, los trabajadores, los ecosistemas y la vida en general.

En este mismo litoral, el gobierno colombiano viene planteando desde los años 60, la construcción del Canal Interoceánico Atlántico-Pacifico a través de los ríos Atrato-Truandó. Con la falacia de aumentar los ingresos económicos del país y financiar la pobreza, la desnutrición de los niños, la vivienda, y la infraestructura de departamentos como el Chocó. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) levantó el plano Topográfico y en 1970 una Comisión de Estados Unidos concluyó que el único lugar para hacer una vía interoceánica a nivel del mar, sin esclusas es en Colombia. Pero para tal fin deben desterrar la población, utilizar explosivos para romper rocas y devastar extensas zonas de selva chocoana.

Si vamos mar adentro hacia el norte, encontramos la frontera caliente con Nicaragua y su proyecto de construcción del Canal interoceánico Caribe-Pacífico, pasando por el Lago de Nicaragua e istmo de Rivas en un recorrido de 270 kilómetros. Muy cerca del polémico MURO del odio y racismo propuesto por el archimillonario presidente de Estados Unidos, Donal Trump, este proyecto le causa resquemores a las políticas de su país porque es de Nicaragua, en América Central y lo desarrolla una empresa China. No sucedió lo mismo en 1903, cuando su expansionismo encontró tierra fértil en el gobierno colombiano que facilitó el robo del Departamento de Panamá para la construcción del

Canal Interoceánico, Estados Unidos ha obtenido grandes ganancias no sólo económicas, sino estratégicas y militares para vigilar el mundo.

El gobierno colombiano hizo un gran escándalo por los límites marítimos que reclama Nicaragua cerca a la olvidada Isla de San Andrés, Santa Catalina y los Cayos, pero no se escucharon las voces que piden inversión social en la población de los barrios marginales de San Andrés. Igualmente hace pocos años no se escucharon las voces de rechazo ante la pérdida de límites fronterizos y soberanía nacional cuando Uribe Vélez aprobó la instalación de siete bases militares de Estados Unidos en tierra y mares de Colombia.

Estas son las fronteras marítimas con el mundo del capital, el macro-comercio, el tráfico de armas, el narcotráfico, el turismo y prostiturismo, **el pillaje**, que pone de rodillas a gobiernos y políticos con sobornos y corrupción. Mientras se ensanchan y profundizan las fronteras de la miseria, la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición, el desempleo, el rebusque y el trabajo informal de un pueblo al que se le imposibilita la vida digna. Estas fronteras, son a la vez el punto de partida de los recursos naturales en los bolsillos del **pillaje,** y el punto de entrada del mercado internacional que inunda y apabulla el producto nacional con cuentillas de cristal y espejitos plateados de los TLC.

Pero **el pillaje** muestra la cara de ternura social en programas de fundaciones internacionales, por ejemplo, en 2016 la fundación Lovenet de Estados Unidos, con el apoyo de la Casa Pedro Domecq Colombia, trajo al país el paquete de alimentos *Meal Packs,* contra la inanición y desnutrición, afirman que el costo es de amor, servicio, compasión y unidad en la creación de un mundo humano y en paz, movilizan corazones para erradicar el hambre y la desnutrición en Colombia, no sólo física sino también de la mente y del espíritu en empresas, colegios y comunidades vulnerables. "Estamos produciendo esta fórmula y distribuyendo estos paquetes en Colombia, comenzando por las etnias de la Sierra Nevada de Santa Martha y la Guajira" dice, Ángela Aguirre, fundadora-presidente de Lovenet.[5]

Que fatal casualidad, en febrero y marzo de 2017, los indígenas Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta presentaron síntomas de una rara enfermedad y se están muriendo. Todo quedó en silencio una vez que el Instituto Nacional de Salud dictaminó: "infección respiratoria aguda de tipo viral"… ¿Una gripa que deja 12 indígenas muertos, de los que reportaron oficialmente? ¿Cuántos en realidad están muriendo y cuáles son las causas verdaderas?… Y no es señalización nuestra, que las muertes sean provocadas por la reacción de alimentos transgénicos que no son de la cultura indígena.

Estos programas sociales los incrementan en Colombia desde la Alianza para el Progreso, en la década del 60, a través de Caritas Internacional, Usaid y otras fundaciones. Un sorbo de leche, un pedazo de pan, un corte de cabello y una limpieza dental a cambio del silencio ante la depredación y expoliación de recursos naturales y soberanía del país. Un llamado manipulador que rinda a las clases populares y movimientos sociales a la inercia y el conformismo, y a los movimientos guerrilleros a la pacificación y entrega de los fusiles libertarios.

El Ejército de Liberación Nacional, hace un llamado a la población a estar alerta, denunciar los graves efectos que causan estos programas de dominación cultural, social, política y económica, de "la mente y el espíritu", a movilizarse frente a los megaproyectos expansionistas del capital transnacional, cargados de explotación, masacre laboral, represión social y muerte ambiental.



5 http://lovenet.org

CORALES VIVOS



CORALES BLANQUEADOS
...MUERTOS



En las ciudades costeras, contrastan el turismo y la voracidad del capital transnacional con la pobreza y necesidades del pueblo.



ITINERARIO BÁSICO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE





1. 1613 ***inicia la dinastía de los Romanov***, se fortalece la *relación feudal* de los nobles sobre los siervos.

2. En 1682 asume el poder Pedro I, ***inicio del Imperio Ruso***. Con Catalina II la Grande el Imperio se expandirá hasta el Mar Negro y las fronteras con el imperio Otomano.

3. En 1860 Rusia tiene 70 millones de habitantes, 90% de ellos campesinos dominados bajo relaciones feudales.

4. Tras la derrota de Rusia en la Guerra de Crimea (1853-1856), mediante la cual el capital europeo controla el Imperio ruso, el hambre produce disturbios en el campo y se evidencia el *resquebrajamiento de la vieja relación social*. Por eso, en ***1861 se decreta la emancipación de los siervos***, se introducen los *zemstvos* (asambleas de distritos) a fin de acomodarse a las transformaciones capitalistas en curso, sin embargo la explotación sobre los campesinos se mantiene. Se va desarrollando una capa de intelectuales, y se suceden levantamientos de campesinos orientados por el movimiento populista *narodnikis (socialistas campesinos)*.

5. En 1881 es asesinado Alejandro II, asume el poder Alejandro III quien intenta dar reversa a las reformas liberales. Se intensifica la entrada de capital externo al que la burguesía Rusa estaba subordinada, se acelera el proceso de industrialización y se forja una clase obrera industrial que se concentra en Petrogrado y Moscú, aun cuando su peso no sobrepasa el 10% del total de trabajadores.

6. En 1894 muere Alejandro III, Nicolás II asume el poder, se muestra incapaz para administrar las contradicciones que genera el tránsito del régimen feudal al capitalismo, su esposa Alejandra y el charlatán Rasputín ganan injerencia en los asuntos del Estado, acrecentando la ***ilegitimidad del zarismo***.

7. 1896 se inicia la ***nueva fase de crisis del capitalismo mundial***, que al extenderse dará lugar entre otros hechos a la Primera Guerra Mundial

(PGM).1889 primer intento de fundar el *Partido Socialista Obrero Social Demócrata de Rusia* PSODR

8. En 1900 Lenin regresa de la prisión en Siberia, dirige el periódico revolucionario *Iskra* (La chispa), medio a través del cual se va creando una red clandestina partidaria que permite difundir las tesis del marxismo y ***la necesidad de una revolución socialista dirigida por la clase proletaria***. En 1900 algunos elementos narodnikis fundan el *Partido Social Revolucionario (PSR),* de base mayoritaria campesina y de tendencia reformista liberal republicana que disputará la dirigencia de las clases subalternas.

9. En 1902 Lenin publica el folleto "*Qué hacer*" en el que plasma los lineamientos centrales del PSODR, ***critica a las diferentes posturas liberales*** (espontaneistas, anarquistas, economicistas, reformistas). Se opone a la composición interclasista del partido, se muestra a favor de que *sus mayorías sean decididamente proletarias, y se trabaje por la unidad con la clase campesina*. Ante la represión zarista identifica la necesidad de crear una organización centralizada compuesta por los cuadros que aseguran el desarrollo de las organizaciones de base clasista.

10. En 1903 ***el Partido se divide*** en: *i*) el ala reformista de los Mencheviques (minoría) que aboga por una etapa de transición democrático-burguesa previa al socialismo; *ii*) el ala revolucionaria de los Bolcheviques (mayoría) que comprende la necesidad de ir de manera ininterrumpida al socialismo, de tomar el poder mediante métodos revolucionarios, entendiendo las luchas legales y por la reforma como medios subalternos de la estrategia revolucionaria.

11. En 1904 se inicia la guerra ruso-japonesa por el dominio de Manchuria.

12. Al iniciar 1905 se reclaman medidas por la democratización, en febrero los trabajadores se declaran en huelga, se sucede una gran movilización hacia el palacio del zar, las peticiones son rechazadas y duramente reprimidas (domingo sangriento).

13. En junio se levantan los marineros del acorazado Potemkín en Odesa y la guarnición de Kronstadt. En octubre **insurgen los *Soviets de obreros*** (asambleas), una forma política de gobierno directo que se extenderá a otras áreas del país al crearse los soviets de campesinos y soldados. El Soviet de obreros de Petrogrado levanta pliegos y se va a la huelga general. En diciembre el soviet es atacado militarmente. Las movilizaciones y la huelga general obligan al zar a aceptar la creación de una asamblea representativa (Duma) dominada en mayoría por la burguesía, y a ampliar ciertas libertades sociales. Las jornadas de 1905 demostraron ***el papel determinante del proletariado urbano, en un país de población mayoritariamente rural y campesina.*** El PSODR pasa de unos cientos hasta cerca de ocho mil afiliados.

14. A inicios del año siguiente el gobierno recompone su poder, de manera que la Duma terminará siendo disuelta y reabierta con mayores limitaciones. Se inicia un proceso de ***reflujo del movimiento revolucionario***. Al interior del POSDR se suceden intensos debates sobre la conveniencia de su participación en la Duma. En 1907 Lenin se ve forzado a salir del país.

15. La Segunda Internacional camina hacia su debacle, ***se va imponiendo la idea que es posible llegar al socialismo mediante reformas***, se promueve la lógica claudicante de aliarse con las burguesías nacionales, tendencia que colocará al proletariado a merced de las burguesías, ya en camino a la guerra de rapiña inter-imperialista. Lenin y otros socialistas se oponen y llaman a convertirla en guerra revolucionaria por el socialismo.

16. En 1914 ***inicia la PGM***, con su participación el zarismo condena a millones de proletarios y

campesinos a la muerte. Se forja el descontento en el frente de guerra que alienta las deserciones masivas, y en el resto de Rusia crece el hambre y la insatisfacción.

17. El 23 de febrero de 1917 (8 de marzo del actual calendario) las mujeres se movilizan pidiendo paz y pan, animan a los proletarios de las fábricas y se da lugar a una huelga general en Petrogrado. ***La revolución se desencadena*** pero la dirigencia Bolchevique se encuentra en la cárcel o en el exilio; las masas quedan a expensas de los mencheviques que se inclinan hacia la derecha y ayudan a constituir un **gobierno provisional** (el 27 de febrero) dirigido por la burguesía y que terminará en manos de Kerenski (PSR). **El zar Nicolás II** *queda aislado, sin apoyo y* **abdica**, finalizando así tres siglos de dinastía Romanov.

18. El PSR y los mencheviques se tornan colaboradores del gobierno provisional burgués, ***la revolución gira hacia la derecha***.

19. A inicios de abril regresa Lenin del exilio, identifica ***la existencia de dos poderes***: *uno que gobierna de hecho* a través de las mayorías proletarias en las fábricas y batallones por medio de los soviets, pero aun dominado por los mencheviques; *otro formal* dirigido por los burgueses y terratenientes monárquicos, que no quieren cambios, que le teme a las masas organizadas y continua comprometido con la guerra. A contracorriente e incluso tildado de loco, Lenin publica sus ***tesis de abril*** en las que reclama ***todo el poder para los soviets***, llama a explicar pacientemente la situación dentro del proletariado y se pronuncia por organizar la insurrección para derrocar al gobierno.



20. En junio las movilizaciones de proletarios empiezan a enarbolar las consignas bolcheviques; el gobierno diseña una nueva ofensiva en el frente de guerra que termina en desastre; en julio las masas se impacientan y se lanzan a las calles exigiendo todo el poder a los soviets, sin embargo el gobierno contraataca, arrecia la represión e ilegaliza el Partido Bolchevique; Lenin pasa a la clandestinidad. A pesar de esto, el PSODR se multiplica al pasar de 24 mil a 240 mil afiliados entre febrero y julio.

21. En agosto Kerensky asume todos los poderes y se ensaya un golpe militar (Kornilov) a fin de regresarle el poder a la ultraderecha. Los bolcheviques son nuevamente legalizados, atacan la ultraderecha, para luego golpear a la burguesía en el gobierno.

22. En septiembre el trabajo paciente y por la base da sus frutos, ***el Partido Bolchevique obtiene la mayoría en los soviets*** de Petrogrado y Moscú. La situación vuelve a girar hacia la izquierda.

23. ***En Octubre***, se aísla el gobierno provisional, los bolcheviques se lanzan a la insurrección armada siendo coronada con éxito ***la toma del poder***. En forma paralela se desarrolla *el II Congreso de todos los soviets, que* **da inicio a la República de los soviets** cuyo propósito es la abolición de la explotación y la construcción del socialismo.


Hace 100 años,


el 8 de marzo de
1917


las obreras rusas


convirtieron
la celebración


del Día Internacional
de la Mujer


en el inicio


de la primera
revolución socialista


PATRIARCADO Y
CAPITAL ALIANZA
CRIMINAL !!!
de la historia





“SIEMPRE REBELDES”
“Nuestra lucha será ejemplo”
Fidel Castro. 1 año de su muerte.



“SIEMPRE REBELDES”
Ser como el Ché.
50 años de su muerte.



“SIEMPRE REBELDES”
Socialismo o barbarie.

Lenin.
Revolución Rusa



“SIEMPRE REBELDES”
Un mundo que ganar.

150 años del Primer Tomo
“El Capital” Carlos Marx.